LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

DE LOS SOLICITANTES DE ASILO  
Guía práctica para la abogacía



ABOGACÍA ESPAÑOLA

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL  
DE LOS SOLICITANTES DE ASILO  
Guía práctica para la abogacía

© FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA

Paseo de Recoletos, 13

28004 Madrid

Teléfono: 91 523 25 93

E-mail: [fundacion@fundacionabogacia.org](mailto:fundacion@fundacionabogacia.org) fundacion.abogacia.es

EDICIÓN: Fundación Abogacía Española

AUTORES: Ana María Torres, Noemí Alarcón y Patricia Bárcena

con la colaboración del Equipo de Protección de la Delegación de ACNUR en España

CORRECCIONES AL TEXTO: Francisco Segovia

ILUSTRACIONES: ©Eventos y Sinergias - Ana Belén Sánchez Garea

MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Eventos y Sinergias

DEPÓSITO LEGAL: M-18350-2017

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, ni registrada ni transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnéti­co, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo, por escrito, del editor.

Prólogo, por Victoria Ortega y Francesca Friz-Prguda 5

1. [Introducción 9](#bookmark2)
2. [¿Cuál es el marco normativo aplicable? 11](#bookmark4)
3. [Conceptos básicos sobre protección internacional 15](#bookmark6)

* ¿Qué diferencia existe entre *asilo* y *protección subsidiaria?* 15
* ¿Qué se entiende por *temor fundado?* 17
* ¿En qué puede consistir la *persecución*? 19
* ¿A quiénes se denomina *agentes de persecución y agentes de protección*? 25
* ¿En qué casos se aplican las *cláusulas de exclusión*? 25

1. Detección de personas con necesidades de protección internacional

y acceso al procedimiento 27

* Detección de personas con necesidades de protección 27
* Acceso al procedimiento 28

1. [Intervención letrada 31](#bookmark10)

* Procedimiento en frontera y CIE 32
* Procedimiento en territorio 34
* Recurso contencioso-administrativo. Interposición de demanda y medidas

cautelares 36

ÍNDICE

* Pautas para la utilización de la *Regla 39* ante el Tribunal Europeo

de Derechos Humanos 38

1. Mantenimiento de la unidad familiar de refugiados:

[la tramitación de la reagrupación familiar o la extensión de la protección 41](#bookmark12)

* ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la extensión familiar? 41
* ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la reagrupación familiar? 44

1. Personas en situación de vulnerabilidad, en particular: menores,

determinados grupos de mujeres y personas perseguidas por su orientación sexual o identidad de género 45

* ¿Pueden los Menores no acompañados solicitar protección internacional?

Pautas de actuación 46

* Grupos vulnerables de mujeres y víctimas de trata 48
* Persecución por orientación sexual (LGTBI) 51

1. [Otros mecanismos de protección: reasentamiento y reubicación 55](#bookmark14)
2. Herramientas de apoyo a las solicitudes de protección (guías, protocolos,

direcciones web de organismos internacionales y organizaciones especializadas) 57

1. [Jurisprudencia recomendada 61](#bookmark16)

Los actuales conflictos armados en África y Oriente Medio o las graves crisis en otras lati­tudes como Venezuela o América Central han provocado movimientos de población quizás sin precedentes en la historia moderna del ser humano, al menos en lo que se refiere al vo­lumen de personas desplazadas forzosamente. Se habla ya de una cifra superior a 65 millones de refugiados y desplazados internos en todo el mundo.

Las causas de esta situación tienen tres ver­tientes: por un lado el surgimiento de nuevos conflictos en los últimos años; el hecho de que estos conflictos se suman a los ya existentes, los cuales se perpetúan en el tiempo (son ya 40 años de guerra en Afganistán y 30 en Soma­lia), y en tercer lugar, que las soluciones para aquellos que tuvieron que huir con lo puesto -como son el retorno voluntario, la integración o el reasentamiento-, no llegan al mismo ritmo o incluso se vuelven inviables.

Al hilo de lo anterior, cabe destacar la firma de la Declaración de Nueva York sobre Refu­giados y Migrantes de septiembre de 2016 en la que 193 Estados miembros de la ONU reno­varon su compromiso con la protección de los refugiados a fin de lograr un reparto colectivo y equilibrado de la responsabilidad sobre las personas refugiadas entre países y el desarro­llo de un Pacto Mundial sobre la cuestión en 2018.

Cuando pensamos en aquéllos que han hui­do de los conflictos, fácilmente imaginaremos a hombres, mujeres y niños que huyen de la per­secución o de situaciones de conflicto provoca­do por el ataque de grupos armados regulares o irregulares, gubernamentales o rebeldes. To­dos ellos han sido despojados de su entorno de una forma violenta y desgarradora o no pueden regresar a ellos por el riesgo existente para su libertad o integridad. El derecho internacional, desde sus orígenes, recoge la obligación de darles asilo en un lugar donde puedan vivir ale­jados de un inmediato peligro para sus vidas.

Sin embargo, la propia complejidad de las sociedades del mundo en el que vivimos y de las relaciones entre Estados y los cambios en la tipología de conflictos, nos obligan a reflexio­nar sobre la evolución doctrinal y jurispruden­cial que ha habido en el derecho de los refu­giados en las últimas décadas y reclamar las herramientas y recursos necesarios para su co­rrecta aplicación.

Hoy día hay personas que huyen de grupos armados que controlan zonas geográficas con­cretas en las que imponen normas sociales vio­lentas para la gran mayoría y que ofenden su dignidad más elemental; personas que huyen de la persecución por motivos de orientación o identidad sexual, castigada con cárcel o con la muerte en sus países; mujeres que huyen de prácticas atentatorias contra su integridad física

6 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS S

por el hecho de ser mujeres, como lo es la abla­ción del clítoris, o contra su libertad, como ocu­rre con las que son víctimas de trata o de matri­monio forzoso; un enorme número de menores que viajan solos tras salir huyendo y haberse separado de sus familiares, también, en muchos casos huyendo de situaciones terribles como el reclutamiento forzoso o la explotación.

Igualmente hay que considerar otros facto­res vinculados al desplazamiento forzoso que ya son una realidad, como son los desastres na­turales provocados por el cambio climático, ya que son una causa de desplazamiento, pueden estar detrás de conflictos y, en determinadas circunstancias, provocar situaciones de apatri- dia. El cambio climático ya está actuando como un multiplicador de las amenazas y vulnerabili­dades existentes y empeorará la situación del desplazamiento cuando este ocurra.

Pues bien, los sistemas de protección inter­nacional deberían tener en cuenta todas esas situaciones.

Entender la complejidad de los movimientos migratorios y de refugiados que en la actuali­dad utilizan muchas veces las mismas vías para llegar a un destino y la realidad de los de los refugiados nos obliga a tratar de conocer con mayor profundidad el mundo en que vivimos, y a ser abiertos y proactivos en la aproximación a la realidad de cada individuo que solicita asilo.

Las agencias, las organizaciones y los profesio­nales que nos dedicamos exclusivamente o en algunas de nuestras facetas a la protección de esas personas refugiadas estamos obligados a ello, no ya para ser eficaces en nuestros fines, sino para conseguir que prevalezca el Derecho.

En cualquier caso, no debemos olvidar que dar asilo no es una cuestión de voluntad política de los gobernantes, sino aplicación del Derecho.

Por eso, esta guía editada por la Fundación Abogacía Española en colaboración con ACNUR plantea el reto de la asistencia jurídica adecua­da y necesaria para la protección internacional de personas refugiadas como modo de llegar a lograr esa aplicación del Derecho.

No en vano, sucede que muchas veces las personas a las que van a asistir los abogados no se reconocen a sí mismas como refugiadas y por tanto sus necesidades de protección deben ser identificadas para poder acceder al proce­dimiento de asilo. Aquí nos encontramos con un papel que los abogados pueden jugar en la detección de personas en necesidad de protec­ción. En otros supuestos, como son las llegadas irregulares vía marítima, el carácter mixto de estos movimientos de personas aumenta las dificultades en la identificación de necesidades de protección y suponen hoy por hoy un gran reto de protección. Otra veces, los solicitantes de asilo no están en condiciones de presentar su caso de forma adecuada ya que no se encuen­tran en buenas condiciones psicológicas y físi­cas, no conocen los procedimientos que pueden iniciar, ante quién iniciarlos, o los plazos con los que tienen que contar en cada uno, o a menudo desconocen posibilidades como la extensión o la reagrupación familiar, etc. En estas situaciones, el abogado o la abogada que le asiste puede ser absolutamente determinante para que esas per­sonas puedan acceder a la Justicia, ejercer sus derechos y retomar una vida en paz.

La colaboración de la Abogacía y ACNUR en esta guía garantiza el correcto encuadramiento de la fase de asistencia jurídica y del papel de los abogados dentro del más amplio proceso de atención y seguimiento que debe llevarse a cabo con las personas que no pueden retornar a sus hogares por el riesgo existente para su vida en contextos en que no hay protección del Estado.

Victoria Ortega

*Presidenta del Consejo General  
de la Abogacía Española  
y de la Fundación Abogacía Española*

La especialización necesaria y el enfoque de derechos humanos y de edad, género y diver­sidad en la asistencia jurídica a los refugiados son objetivos y responsabilidades que la Abo­gacía comparte con ACNUR en España.

Desde hace ya dos décadas la Abogacía Espa­ñola ha venido incrementando constantemen­te sus esfuerzos dirigidos al reconocimiento de los derechos de los extranjeros en nuestro país y en particular de los que se encuentran en ne­cesidad de protección internacional. Esta guía realizada en colaboración con la Delegación del ACNUR en España, que viene a sumarse a otras herramientas ya existentes, es un nuevo ejem­plo del sincero compromiso institucional de la Abogacía con los refugiados y de su conciencia de responsabilidad en la defensa de los dere­chos humanos.

Francesca Friz-Prguda

*Representante de ACNUR en España*



Introducción

En los años 2015 y 2016 el número de personas que han llega­do a España y han solicitado protección internacional ha crecido notablemente. Estamos aún muy lejos de otros países europeos, pues apenas se tramitan en España el 1% del total de solicitudes de Europa, pero lo cierto es que cada vez son más las personas que buscan protección en nuestro país. No es un crecimiento co- yuntural, sino que por el contrario responde a un imparable au­mento del número de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los conflictos y las múltiples violaciones de derechos humanos.

Las dificultades crecientes a las que se enfrentan las personas que huyen para acceder a países seguros hacen que cada vez lle­guen en situaciones más vulnerables. El miedo y la desconfian­za por los procesos vividos en el origen y en el tránsito son un obstáculo de cara a plantear adecuadamente sus necesidades de protección, que resultan más difícil de solventar si cabe, por sus propias características, en las fronteras y en los CIE.

La abogacía tiene una gran responsabilidad en la detección, información y asesoramiento de todas estas personas potenciales solicitantes de protección internacional. Por ello esta Guía tiene como objetivo facilitar las herramientas para prestar una asisten­cia letrada de mayor calidad, principalmente en aquellos momen­tos en los que por lo sumario del procedimiento, la situación de privación de libertad o la inmediatez, apenas se cuenta con tiem­po para poder buscar información o fuentes que complementen y/o refuercen la declaración de la persona asistida.

10 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS S

De manera práctica, teniendo especialmente en cuenta las mayores dificultades y situaciones de vulnerabilidad que viven determinadas per­sonas (como pueden ser menores no acompa­ñados, personas con discapacidades, enferme­dades o traumas, supervivientes de abusos o tortura, determinados perfiles de mujeres o per­sonas LGTBI), y, atendiendo a la jurisprudencia que desde las instituciones europeas se ha ge-

OLICITANTES DE ASILO. GUlA PRÁCTICA PARA LAABOGACÍA

nerado dentro del marco del sistema común de asilo, estas páginas quieren ser un complemen­to a la formación; una guía que facilite algunas pautas de actuación, referencias jurisprudencia­les y a otros instrumentos y guías especializadas que actualmente existen, y favorezca la mejor defensa de los derechos humanos de las perso­nas demandantes de protección internacional a lo largo de todo el proceso.

¿Cuál es el marco normativo aplicable?

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Ámbito internacional

[Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en](http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/acuerdos-y-convenios/convencion-y-protocolo-sobre-el-estatuto-de-los-r) [Ginebra el 28 de julio de 1951, y Protocolo sobre el Estatuto de los](http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/acuerdos-y-convenios/convencion-y-protocolo-sobre-el-estatuto-de-los-r) [Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967](http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/acuerdos-y-convenios/convencion-y-protocolo-sobre-el-estatuto-de-los-r). Instru­mento de Adhesión de 22 de julio de 1978 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978. Corrección de errores en BOE núm. 272, de 14 de noviembre).

Ámbito de la Unión Europea

[Carta de Derechos Fundamentales de la UE](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf) - Artículos 18 y 19

[Convenio relativo a la determinación del Estado responsable](http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/acuerdos-y-convenios/convenio-de-15-de-junio-de-1990) [del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados](http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/acuerdos-y-convenios/convenio-de-15-de-junio-de-1990) [miembros de las Comunidades Europeas](http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/acuerdos-y-convenios/convenio-de-15-de-junio-de-1990), hecho en Dublín el 15 de junio de 1990. El instrumento vigente y refundido es el deno­minado Dublín III: [Reglamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:ES:PDF) [Europeo y del Consejo de 26 de Junio de 2013](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:ES:PDF).

[Reglamento (UE) n° 603/2013](https://www.boe.es/doue/2013/180/L00001-00030.pdf) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del Eurodac.

Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de Apli­cación del Acuerdo de Schengen -artículos 28 a 38-. Instrumento de ratificación de España de 23 de julio de 1993 (BOE núm. 81, de 5 de abril de 1994).

12 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS S

Directiva 2001/55/CE de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitati­vo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.

Directiva 2011/95/UE del Parlamento Euro­peo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por el que se establecen normas relativas al re­conocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a la protección subsidiaria y al contenido de la pro­tección concedida.

Directiva 2013/32/UE del Parlamento Euro­peo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, so­bre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.

Directiva 2013/33/UE del Parlamento Euro­peo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional.

Reglamento (UE) n9 439/2010 del Parla­mento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Euro­pea de Apoyo al Asilo.

**Ámbito del Consejo de Europa**

Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950 - Artículos 3, 5, 8,13 y Artículos 2 y 4 del Protocolo 4.

Acuerdo Europeo n9 31 sobre exención de visados para los refugiados, hecho en Estras­burgo el 20 de abril de 1959. Instrumento de Ratificación de España de 2 de junio de 1982 *(BOE núm. 174, de 22 de julio de 1982).*

**Ámbito Español**

Ley 12/200Í, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsi­diaria (BOE *núm. 263, de 31 de octubre),* modi­ficada por la **Ley 2/2014,** de 25 de marzo.

Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del De­recho de Asilo y de la condición de Refugiado, mo­dificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo *(BOE núm. 52, de 2 de marzo de 1995).* Modificado por el **Real Decreto 865/2001,** de 20 de julio; por el **Real Decreto 1325/2003,** de 24 de octubre y por el **Real Decreto 2393/2004,** de 30 de diciem­bre. Pendiente nuevo desarrollo Reglamentario.

Real Decreto 1325/200;, de 24 de octu­bre, por el que se aprueba el Reglamento so­bre régimen de protección temporal en caso

de afluencia masiva de personas desplazadas *(BOE núm. 256, de 25 de octubre).*

Instrucción conjunta de la Secretaría de Es­tado de Seguridad del Ministerio del Interior en materia de información y documentación a facilitar a los solicitantes de protección interna­cional de fecha 30 de junio de 2010.

Instrucciones conjuntas de la Dirección Ge­neral de Policía y de la Guardia Civil, la Direc­ción de Política Interior y la Dirección General de Inmigración, sobre el tratamiento a polizo­nes extranjeros, de 28 de noviembre de 2007.

**Otras Normas relacionadas**

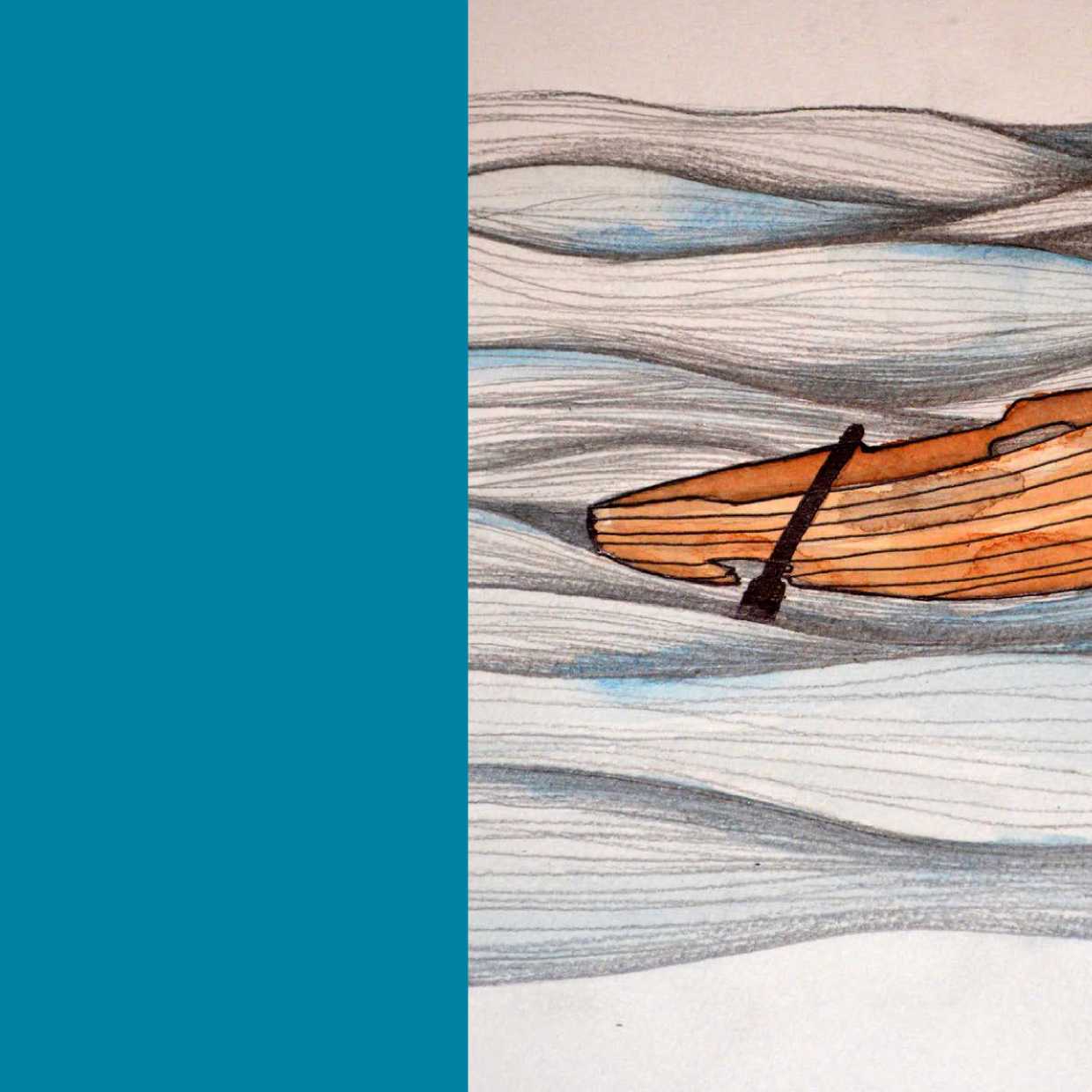
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Es­paña y su integración social *(BOE núm. 10, de 12 de enero),* modificada por la **Ley Orgánica 8/2000,** de 22 de diciembre; por la **Ley Orgá­nica 11/2003,** de 29 de septiembre; por la **Ley Orgánica 14/2003,** de 20 de noviembre; por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre; por la **Ley Orgánica 10/2011,** de 27 de julio; por el **Real Decreto-ley 16/2012,** de 20 de abril; por la **Sentencia 17/2013,** de 31 de enero, del Tribunal Constitucional y por la **Ley Orgánica 4/2013,**de 28 de junio.

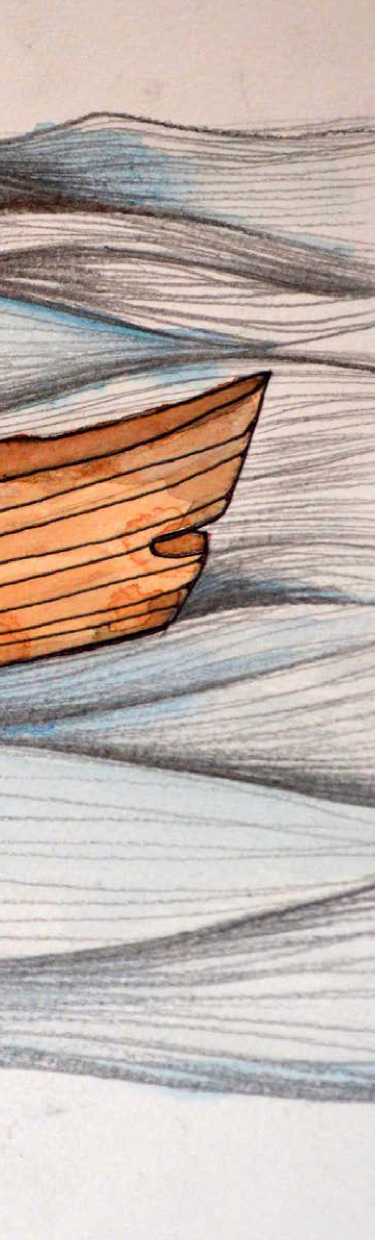
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Or­gánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración so­cial, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 *(BOE núm. 103, de 30 de abril. Corrección de errores en BOE núm. 145, de 18 de junio),* mo­dificado por la **Sentencia de 12 de marzo de 2013,** del Tribunal Supremo; por la **Sentencia de 11 de junio de 2013,** del Tribunal Supremo, por el **Real Decreto 844/2013,** de 31 de octu­bre y por el **Real Decreto 162/2014,** de 14 de marzo.

Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamien- to de extranjeros *(BOE núm. 64, de 15 de marzo)*

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954. Instrumento de adhesión de España de 24 de abril de 1997 *(BOE núm. 159, de 4 de julio de 1997).*

Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de recono­cimiento del estatuto de apátrida *(BOE núm. 174, de 21 de julio. Corrección de errores en BOE núm. 276, de 17 de noviembre).*



Conceptos básicos sobre protección internacional

¿Qué diferencia existe entre ***asilo*** y ***protección subsidiaria***?

En el año 2009, el ordenamiento jurídico español determinó por primera vez que el contenido de la protección internacional está integrado por el derecho de asilo y el derecho a la protección subsidiaria. Dos figuras de protección que pese a tener algunos efectos similares son distintas.

El derecho de asilo es un derecho humano previsto en la De­claración Universal de Derechos Humanos de 1948 y desarro­llado en la Convención de Ginebra de 1951 y en su Protocolo de Nueva York de 1967. Es el derecho que tiene toda persona, en caso de sufrir persecución, a buscar protección en otro país. En el marco del derecho de la UE, está recogido en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

El concepto de protección subsidiaria, sin embargo, no apa­rece reconocido en ningún tratado internacional, sino que surge en el marco de la Unión Europea (herramienta regional), donde, a diferencia de las iniciativas en América Latina (Declaración de Cartagena de 1984) o en la Unión Africana (Convención OUA de 1969), en las que se opta por ampliar la definición de refugiado de la Definición de Ginebra de 1951, se decide crear otro estatuto de protección internacional.

La legislación española establece, a través de la Ley 12/2009, que el derecho de asilo es la ***protección dispensada*** *a quienes se reconozca la* ***condición de refugiado***.

La condición de refugiado, de acuerdo al ar­tículo 3 de esa misma ley, se reconoce *a toda persona que, debido a* ***fundados temores*** *de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orien­tación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacio­nalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede, o a causa de dichos temo­res, no quiere regresar a él, y no esté incurso en algunas de las causas de exclusión del artículo 8, o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.*

La protección subsidiaria[[1]](#footnote-2), por su parte, *se otorgará a aquellas personas de otros países y a los apátridas respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen, en el caso de los naciona­les, o al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley.* Son da­ños graves:

La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material.

La tortura y los tratos inhumanos o degra­dantes en el país de origen del solicitante.

Las amenazas graves contra la vida o la in­tegridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno (no individualizadas).

Ambas figuras, asilo y protección subsidiaria, tienen como resultado, en caso de concesión, la garantía del principio de no devolución[[2]](#footnote-3), pie­dra angular de la protección internacional. En el caso español, que no en el de otro países de la UE, conllevan un nivel de protección similar al del estatuto de refugiado. Sin embargo, no debemos olvidar que son dos figuras distintas[[3]](#footnote-4), no sólo en cuanto a los requisitos sino también por los de­rechos que se derivan y los motivos de cesación.

La condición de refugiado requiere la exis­tencia de un temor fundado de persecución (no de persecución pasada) por alguno de los motivos recogidos en la Convención de Gine­bra; y, sin embargo, la protección subsidiaria se

basa en la existencia de motivos fundados para creer que se pueda sufrir daños graves en caso de retorno al país de origen o residencia, por motivos distintos a los recogidos en la defini­ción de refugiado.

Es importante señalar, que la Ley 12/2009, además del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, contiene en sus artículos 37 y 46.3 referencias expresas a la posibilidad de autori­zar la permanencia en España a solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido rechazadas por razones humanitarias, que también pueden ser invocadas por los letrados en sus escritos.

**¿Qué se entiende por *temor fundado?[[4]](#footnote-5)***

Para que una persona sea reconocida como refugiada basta con que existan indicios su­ficientes para considerar que tiene "temores fundados de ser perseguida por unos motivos determinados".

Al elemento del temor -estado de ánimo y condición subjetiva- se le une el calificativo de "fundado". Lo que implica que no basta sentirse

perseguido o manifestar tener miedo, sino que a ese temor debe añadirse un elemento objetivo, y considerarse ambos elementos de forma con­junta para poder determinar si tales temores se consideran fundados.

La evaluación del elemento subjetivo va uni­da al análisis de la personalidad del individuo, ya que las reacciones psicológicas de cada quien ante hechos similares son distintas; y, por otra parte, de sus antecedentes personales y familia­res. Los informes psicológicos o psiquiátricos y la aplicación del Protocolo de Estambul[[5]](#footnote-6) para ca­sos de supervivientes de malos tratos o tortura, son herramientas válidas que se pueden utilizar como prueba.

A la hora de analizar el elemento objetivo será preciso evaluar las razones por las que se solicita protección en base a la información re­levante y objetiva sobre el país de origen (COI en sus siglas en inglés) de la persona solicitante. No es el papel del letrado el de fiscalizar o dudar de aquello que la persona solicitante manifiesta, pero ello no es óbice para ser riguroso a la hora de preparar o fundamentar una solicitud de pro­tección internacional (ver listado de fuentes de COI en el punto 9 de esta guía).

La información sobre el país de origen (COI) debe ayudar a dar respuesta a preguntas rela­tivas a la geografía, la situación humanitaria, de respeto a los derechos humanos y de seguridad, la situación legal y política, la situación económi­ca y social, así como aspectos culturales.

Esta información sobre el país de origen es especialmente relevante para establecer si el temor de persecución del solicitante está o no fundado[[6]](#footnote-7). Y, en el marco de la asistencia jurídi­ca, será de gran utilidad para la realización de entrevistas e informes.

Pero la información de COI es complemento de las alegaciones creíbles del solicitante, y es preciso tener en cuenta que en ocasiones, en particular en países con regímenes totalitarios, la información de COI puede ser muy escasa y será necesario atender a la información general de derechos humanos en el país en concreto.

El ACNUR, con sus numerosas posiciones de no retorno a determinados países o sus guías de países, que incluyen perfiles de riesgo, es una importante fuente de información; la Cruz Roja Austríaca, el Centro Austríaco de Investigación y Documentación sobre País de Origen y Asilo

(ACCORD), junto con la Red de Formación COI, la Asociación Internacional de Jueces en Derecho de Refugiados (IARLJ) y las Autoridades de los estados miembros en materia de asilo han ela­borado directrices relacionadas con la COI.*[[7]](#footnote-8)*

El artículo 10.3.b) de la Directiva de Procedi­mientos establece que los Estados garantizarán que se obtenga información precisa y actuali­zada de diversas fuentes respecto a la situación de los países de origen y de tránsito. Señala, como ejemplos, la EASO, ACNUR y organizacio­nes internacionales de defensa de los derechos humanos.

El mismo artículo, en su apartado d) es­tablece que se puede obtener información de personas expertas en ámbitos concretos, como temas médicos, culturales, religiosos, de menores o de género.

Desde los 90, el TEDH viene señalando la va­riedad de fuentes como un requisito necesario a la hora de evaluar la situación del país en los casos relacionados con el Artículo 3 del Conve-

nio Europeo de Derechos Humanos (caso Salah Sheekh[[8]](#footnote-9) y Sentencia Gaforov[[9]](#footnote-10) en la que se con­firma que este requisito también se aplica a las autoridades de asilo y a los tribunales).

Los temores pueden considerarse fundados si se puede demostrar, en la medida de lo razo­nable, que la permanencia en el país de origen, o su retorno a él, se ha hecho intolerable por las razones indicadas en la definición. Debido a la dificultad que implica probar en numerosas ocasiones los hechos en que se fundamente la solicitud, se requiere una razonable probabili­dad a modo de indicio - no meras sospechas o conjeturas, pero tampoco prueba plena[[10]](#footnote-11).

**¿En qué puede consistir la *persecución?***

No existe una definición un ¡versal mente aceptada de lo que se entiende por persecu­ción. Del artículo 33 de la Convención de Gine­bra puede deducirse que toda amenaza contra la vida o la libertad de una persona por motivos de raza, nacionalidad, religión, opiniones polí­ticas, o pertenencia a un grupo social determi­nado, es persecución; al igual que son actos de persecución las violaciones graves o sostenidas o sistemáticas de los derechos humanos, inclui­da la discriminación, si tuvieran consecuencias de carácter esencialmente lesivo para la perso­na que la padece, tales como:

los actos de violencia física o psíquica, in­cluidos los actos de violencia sexual;

las medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discrimi­natorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria;

los procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios;

la denegación de tutela judicial, de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias;

los procesamientos o penas por la nega­tiva a prestar servicio militar en un con­flicto en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos tales como delitos de guerra o delitos contra la humanidad, entre otros;

los actos de naturaleza sexual que afecten a personas adultas o a menores.

Es importante insistir en tener en cuenta que la discriminación o el trato menos favora­ble, cuando tienen consecuencias de carácter particularmente lesivo, o cuando se dan de forma cumulativa, pueden llegar a equivaler a persecución.

El riesgo de sufrir persecución debe ser per­sonal. No obstante, por un lado, no es exigible que la persecución haya tenido lugar, ya que la definición de refugiado habla de temores funda­dos de ser perseguido. Por otro lado, el hecho de que el riesgo de persecución pueda extenderse a muchas personas por suceder, por ejemplo, en un conflicto o en una práctica persecutoria muy extendida, como podría ser la mutilación genital femenina, no impide el reconocimiento como refugiado. Basta, por tanto, con que exista un riesgo razonable de que se personalice en quien solicita la protección para cumplir con los requi­sitos de la definición de refugiado.

En ese sentido, si bien hay decisiones judi­ciales que indican que es preciso que exista una persecución dirigida particularmente contra la persona interesada por determinados moti­vos[[11]](#footnote-12), no es ésta la interpretación correcta de la Convención.

La persecución puede darse, como ya hemos visto, según el artículo 3 de la Ley 12/2009, por motivos de raza, religión, na­cionalidad, ¡deas políticas, pertenencia a un grupo social determinado, de género u orien­tación sexual.

Es indiferente que la persecución se pro­duzca por uno cualquiera de los motivos indi­cados o por la combinación de dos o más de ellos[[12]](#footnote-13). En muchas ocasiones la persona soli­citante ni tan siquiera sabrá cuales son estos motivos que se consideran de persecución y simplemente narrará los hechos por los cua­les él o ella se sienten perseguidos y solicitan protección. Esta situación es habitual en mu­chos casos de género y de menores no acom­pañados. Tanto el letrado que asesore en la solicitud, como la persona que la instruya y examine, deberán encauzar la misma, hacia uno de estos motivos, sin olvidar que pueden ser reales o atribuidos.

Los conceptos raza, religión y nacionali­dad han de entenderse todos ellos en sentido amplio, teniendo siempre en cuenta lo dicho respecto a los mismos en los tratados inter­nacionales.

En relación a la persecución por motivos religiosos[[13]](#footnote-14) es importante considerar que la religión, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y los Pac­tos Internacionales de Derechos Humanos, se entenderá como libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (profesión de creen­cias teístas, no teístas o ateas), lo que incluye la posibilidad de cambiar de religión, y la libertad de manifestar la misma tanto de forma pública como privada, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

La nacionalidad no se limita a la posesión o no de la ciudadanía sino que también com­prende al grupo étnico, cultural o lingüístico, o de mismo origen geográfico. Y la raza, asimis­mo, comprende por igual el color, el origen o la pertenencia étnica.

Respecto a las opiniones políticas es preciso manifestar que, en sí mismo, el sostener opi­niones políticas distintas a las imperantes en el país no significa que se pueda ser refugiado. Es preciso que esas opiniones puedan dar lu­gar a un riesgo de persecución. Normalmen­te, es como consecuencia de la realización de determinadas actividades para expresar ¡deas de tipo político cuando se produce el riesgo

de persecución, o el temor de ser víctima de la misma. Es muy importante señalar, que no se requiere que la persona solicitante sea una activista política y en muchos casos es posible que ni tan siquiera tenga ideales políticos espe­cíficos, basta con que se le imputen esas opi­niones por parte del agente perseguidor. Esta imputación puede darse por el mero hecho de ser miembro de una determinada familia o de una etnia, ser originario de una determinada localidad o en contextos de gran polarización por no cumplir con los requerimientos de una parte en conflicto: "si no colaboras conmigo, estás contra mí".

En relación al temor de persecución por pertenencia a un grupo social determinado[[14]](#footnote-15) es preciso considerar, que la expresión "de­terminado grupo social" puede comprender personas de antecedentes, costumbres o con­dición social similares. Se considera que existe un "grupo social":

a) cuando las personas integrantes de un grupo comparten una característica inna­ta o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse (LGTBI, albinos, mu­jeres, niños, familias), o bien comparten

una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o con­ciencia que no se les puede exigir que re­nuncien a ella (por ejemplo una profesión u ocupación pasada); y

b) cuando dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trata por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores.

En cualquier caso el grupo debe compartir unas características diferenciales y distintas al mero hecho de ser perseguidos.

El tamaño del supuesto grupo social no es un criterio importante en la determinación de la existencia de un grupo social ni tampoco es necesario que todos los miembros de un grupo estén en riesgo de ser perseguidos.

Es indiferente si la persona posee real­mente, o siente que posee, la característica que le definiría como miembro de un grupo social determinado, ya que la persecución se puede dar debido a que el agente o agentes de persecución se la atribuyen.

Quizás este motivo, al ser el más ambiguo, ha servido de paraguas protector de algunas si­tuaciones no previstas en sentido estricto, o de las catalogadas en la Convención de Ginebra, principalmente debido al tiempo en que fue aprobada, pero que son realmente merecedo­ras de protección. Así a lo largo de los años se han considerado un determinado grupo social por la Audiencia Nacional a los homosexuales rumanos, a los desertores militares armenios, o los periodistas argelinos (STS de 24 de sep­tiembre de 1996, 28 de octubre de 1997 y 25 de noviembre de 1997).

Por otro lado, históricamente, los Estados que se comprometieron con la protección de las personas refugiadas, han interpretado las solicitudes de asilo desde una perspectiva he- teropatriarcal que deja fuera la violación de los derechos humanos de las personas perseguidas por motivos de género, en su gran mayoría mu­jeres. Por ello, es acertado decir que la falta de protección que sufren muchas de ellas provie­ne, en gran medida, de la forma restrictiva de interpretar la Convención de Ginebra de 1951. Aunque tanto hombres como mujeres sufren esta persecución, sin embargo, es ejercida en mayor medida contra éstas, debido a la situa­ción de discriminación en la que se encuentran.

En este sentido, un importantísimo avance de la Ley de asilo y protección subsidiaria de 2009, fue la incorporación en el artículo 3 de los motivos de género y orientación sexual como dos causas de persecución a añadir a las cita­das; sin embargo, en el artículo 7, que define de forma detallada los motivos de persecución,

ambas causas se incluyen en el grupo social y se condicionan a las circunstancias imperantes en el país de origen.

La persecución por motivos de género[[15]](#footnote-16) es aquella que se da cuando las violaciones de derechos tienen relación con el papel que se le asigna a una persona en la sociedad por su género o identidad de género o por sus prefe­rencias afectivo-sexuales.

Lo más habitual es que las víctimas de esta persecución sean mujeres, por el mero hecho de serlo o por intentar desafiar el orden patriar­cal que las mantiene subordinadas; y las per­sonas lesbianas, gays, bisexuales y transexua- les e intersexuales (LGTTBI), debido también a las relaciones de poder que se sustentan en estructuras patriarcales y heteronormativas.

Desde el punto de vista estructural, la perse­cución por motivos de género puede manifes­tarse mediante la imposición de leyes y normas sociales, religiosas o culturales discriminato- rías; o a través de penas o castigos despropor­cionados por transgredir este tipo de leyes y normas; manifestándose tanto en el entorno privado como público y ejecutándose por agen­tes estatales y no estatales.

La violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia en el ámbito comunal y nacional (feminicidio, mutilación genital femenina, ma­trimonio forzado, quema de viudas, esteriliza­ción forzada, aborto selectivo, lapidación...) y la trata de personas con fines de explotación se­xual son algunas de las formas de persecución que sufren con frecuencia las mujeres.

Por otro lado, está ampliamente documen­tado que las personas lesbianas, gays, bisexua­les y transexuales e intersexuales (LGBTI), son víctimas de asesinatos, de violencia sexual y de violencia basada en motivos de género, de ataques físicos, de tortura de detenciones ar­bitrarias, de acusaciones por comportamiento inmoral o desviado, de denegación de los dere­chos de asociación, expresión, e información, de discriminación en el acceso al empleo, a la salud y a la educación. Cuando tales actos de abuso y discriminación quedan impunes, y/o cuando se penaliza su orientación, estas perso­nas pueden, si solicitan asilo por este motivo, enmarcarse en los supuestos cubiertos por la definición de refugiado de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ("Con­vención de 1951").

No se debe olvidar que la Ley 12/2009 condi­ciona las persecuciones por motivos de género, por orientación sexual o por identidad de géne­ro a las circunstancias concurrentes en el país de origen, lo que implicará un esfuerzo mayor por parte de quien asesore a la persona solicitante para acreditar las mismas. Hay que tener igual­mente en cuenta, que gran parte de las personas perseguidas por motivos relacionados con el gé­nero son consideradas personas con necesida­des específicas y pueden requerir tener un trato procedimental diferenciado (Ver Capítulo 7)

En estos casos, el análisis de credibilidad debe ser realizado siguiendo criterios estric­tamente profesionales, teniendo en cuenta el contexto en que se está realizando la solicitud y el perfil y antecedentes de la persona solicitan­te. Conviene tener en cuenta, que cuestiones traumáticas, de edad, culturales, educaciona­les, de género, LGTBI... pueden influir directa­mente en la forma en que se plantea la solici­tud y hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar la credibilidad de la solicitud.[[16]](#footnote-17)

Así mismo, las personas que tienen pro­blemas de salud mental obviamente también pueden ser refugiadas, en estos casos lo reco­mendable será solicitar que se recurra a profe­sionales. El estudio del caso deberá ser mucho más minucioso y se deberá aligerar la carga de la prueba.[[17]](#footnote-18) Como ya se ha citado con anteriori­dad, y en línea con lo dispuesto en la Directiva de Procedimientos, para casos de malos tratos y torturas, la aplicación del Protocolo de Estambul para casos de supervivientes de malos tratos o tortura es una herramienta especialmente válida que se debe utilizar como prueba.

Refugiados "sur place" o "in situ": Es impor­tante no olvidar que la necesidad de protec­ción internacional también puede surgir in situ ya que los fundados temores a ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves pueden basarse, en acontecimientos ocurridos en su país de origen durante su ausencia (por ejem­plo cambió de régimen político o situación de conflicto) o en actividades en que haya parti­cipado la solicitante (por ejemplo conversión a otra religión), desde que dejó el país de origen.

En cuanto a los refugiados de guerra[[18]](#footnote-19): Si­tuaciones de conflicto armado y violencia son hoy las principales causas de movimientos de personas refugiadas. La mayoría de estas situa­ciones generan persecución política, religiosa, étnica, social o de género. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiadosly/o su Protocolo de 19672(Convención de 1951) es directamente aplicable a las personas civiles

desplazadas por situaciones de conflicto arma­do y violencia.

**¿A quiénes se denomina *agentes de persecución* y *agentes de protección?***

Históricamente se ha entendido que la perse­cución suele ser resultado de la actuación de las autoridades de un país, sin embargo, la defini­ción no se refiere expresamente al Estado como único agente válido de persecución. De hecho, en la práctica, son numerosos los casos en los que la persecución no procede directamente del Estado y merecen la protección que su propio Estado no puede o no quiere otorgarle.

En este sentido, el artículo 6 de la Directiva 2011/95/CE indica quiénes son agentes de per­secución o causantes de daños graves, conside­rando entre otros a:

El Estado

Partidos u organizaciones que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio

Agentes no estatales, cuando los agentes mencionados anteriormente, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar pro­tección efectiva contra la persecución o los daños graves

La Ley 12/2009, ha traspuesto literalmente el contenido de la directiva en su Artículo 13, incorporándose por primera vez en nuestro ordenamiento la posibilidad de que la perse­cución proceda de agentes no estatales[[19]](#footnote-20), lo cual es acorde y especialmente relevante en relación con las nuevas causas de persecución anteriormente citadas (género y orientación sexual) ya que en estos supuestos la persecu­ción frecuentemente se produce en el ámbito familiar o social más cercano, por agentes no estatales.

Ahora bien, sólo se considerará que dicha persecución se produce si existe inactividad o ineficacia por parte de quien debe otorgar pro­tección. Y, en este sentido, son agentes de pro­tección (Artículol4): el Estado, o los partidos u organizaciones, incluidas las internacionales, que controlen el Estado o una parte considera­ble del territorio.

**¿En qué casos se aplican las *cláusulas de exclusión?***

La lógica de las cláusulas de exclusión (re­cogidas en el Artículo 11 de la Ley 12/2009) se fundamenta en que ciertos actos son tan gra­ves que vuelven a quien los cometió indigno de

recibir protección internacional como refugia­dos. El objetivo último de estas cláusulas, tal como señala ACNUR en sus Directrices[[20]](#footnote-21) sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión, es evitar que haya personas que busquen en la fi­gura del asilo la vía para escapar de sus respon­sabilidades con la justicia.

SOLICITANTES DE ASILO. GUlA PRÁCTICA PARA LAABOGACÍA

Si bien, dadas las graves consecuencias de la exclusión, es importante aplicarlas con cautela y sólo tras una valoración plena de las circuns­tancias individuales del caso: las cláusulas de exclusión deben interpretarse siempre de ma­nera restrictiva.

1. Detección de personas con necesidades de protección internacional y acceso al procedimiento

Detección de personas con necesidades de protección

Las personas que necesitan protección internacional no siem­pre lo verbalizan como tal, y puede ser que no hayan tenido acce­so a la información necesaria sobre las posibilidades de solicitar protección, por ello es necesario realizar siempre crear un am­biente adecuado, realizar preguntas adecuadas y recabar infor­mación sobre la persona interesada. Esta labor puede tener lugar tanto en las entrevistas que se realizan cuando existe una llegada masiva de personas extranjeras, como en el caso del inicio de un expediente de expulsión, o también en el momento de un posible internamiento del extranjero, por ejemplo en un CIE.

Como ya se ha dicho anteriormente, es importante tener infor­mación sobre la situación actual de los países de procedencia de las personas que se asisten; de los conflictos existentes en deter­minados países, o de las persecuciones o violaciones de Derechos Humanos. Para ello, se pone a disposición en el Capítulo 9 de esta guía una serie de enlaces que permiten recabar información en tiempo real acerca de dichas situaciones.

Por otro lado, las preguntas que se realicen pueden ayudar a saber si esa persona puede ser solicitante de protección internacional: pre­guntar, por ejemplo, por qué no puede regresar a su país de origen, por qué decidió emprender la ruta migratoria, cual ha sido la ruta mi­gratoria (itinerario de viaje), si ha viajado solo o sola, cuáles serían las consecuencias del regreso al país de origen o residencia (si tiene mie­do de regresar), si ha sufrido discriminación, se siente amenazada...

Se recomienda tener especial cautela con las mujeres y con los menores (especialmente los no acompañados). En los casos de las muje­res, sería preferible, si es posible, que las entre­vistas sean realizadas por una letrada, ya que se puede generar un ambiente de mayor con­fianza y condiciones más apropiadas para pro­porcionar información que resulte delicada. Se debe, asimismo, tener especial cuidado con las entrevistas a los menores; intentar instaurar un clima cercano, de confianza, y que se realicen en un tono más informal. En todos los casos hay que crear una atmósfera de confidencialidad. En estas entrevistas se pueden detectar tam­bién posibles casos de trata de seres humanos, en estos casos, la sensibilidad y observación de letrados y letradas es clave. (Ver Capítulo 7 so­bre colectivos vulnerables).

También es importante tener en cuenta no sólo el relato de la persona entrevistada sino cualquier elemento de la comunicación no verbal. Y reflejar cualquier elemento referen­te al género, edad, diversidad cultural, etc. Las condiciones de salud en las que se encuentra la persona y el estado anímico también son un posible indicador.

En los CIE, es de especial relevancia tener acceso a la información sobre situación médi­ca y psicológica de la persona solicitante, pues aquí también se pueden detectar situaciones necesitadas de protección.

Tampoco debe olvidar quien realice la asis­tencia letrada anotar las circunstancias en que se realiza la entrevista y que atañen a las con­diciones de la misma. Cualquier elemento, por muy insignificante que parezca, puede servir, primero para detectar una determinada situa­ción de necesidad de protección, y segundo, por poder conllevar en sí mismo una irregu­laridad en el procedimiento. Por ejemplo, las condiciones de las dependencias en las que se realiza la entrevista, la forma, incluso la falta de fluidez en la comunicación entre el intérprete y el entrevistado. Estas posibles irregularidades se deben hacer constar (solicitando al instruc­tor o agente que se encuentre en las depen­dencias en ese momento que las recoja en la solicitud o se recoge en escrito aparte que lue­go se remite al expediente en la OAR).

A fin de facilitar la detección de las personas posibles solicitantes de protección es recomen­dable el uso de la *checklist* para la identifica­ción de necesidades de protección de menores no acompañados o separados y la Guía para la identificación de necesidades de protección in­ternacional, ambas publicadas por ACNUR (ver Capítulo 9).

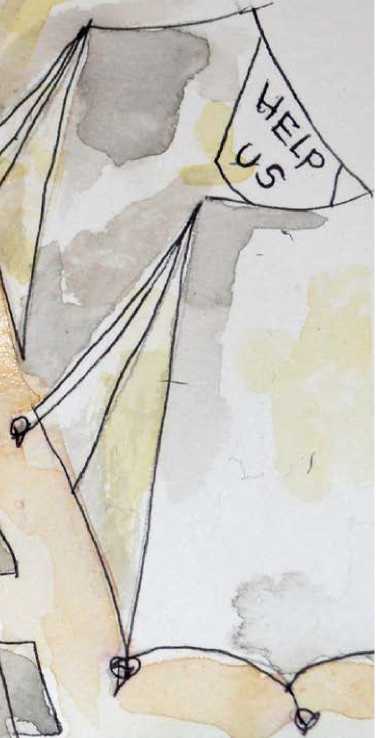
**Acceso al procedimiento**

El derecho a solicitar asilo es universal. Toda persona puede solicitar asilo cualquiera que sea su situación administrativa y en cualquier

momento. Una vez detectada la voluntad de solicitar protección internacional de la perso­na, el letrado tiene un papel fundamental en facilitar y asegurar su acceso al procedimien­to. Para ello, es necesario que se haga constar inmediatamente por escrito ante la autoridad competente (en el caso de España la Policía Na­cional en casi todas las provincias) la voluntad de pedir asilo de la persona.

Los plazos, desde la expresión de la voluntad de solicitar asilo hasta la formalización efectiva de la misma, están regulados por la Directiva de Procedimientos[[21]](#footnote-22), de aplicación directa des­de el 21 de julio de 2015 (en lo no traspuesto en la legislación nacional). Así, si la expresión de voluntad se ha hecho ante la autoridad com­petente, la solicitud debe formalizarse en los tres días hábiles siguientes. Si por el contrario se hace ante otra autoridad el plazo aumenta hasta un máximo de seis días.





1. Intervención letrada

Como se verá a continuación, la intervención letrada tiene ca­racterísticas diferentes en función de si se produce por una solici­tud en frontera o en el territorio.

Una vez detectada la persona que necesita protección inter­nacional, según ya se ha expuesto en el capítulo anterior, y ha­biéndole explicado de forma pormenorizada en qué consiste el procedimiento, así como sus derechos y obligaciones a la luz de la legislación pertinente, se procederá a preparar la entrevista y solicitud de asilo.

Antes de presentar la solicitud es conveniente, si es posible, te­ner una o más entrevistas con la persona solicitante. Generar una escucha activa y contrastar la información para acreditar con datos objetivos el relato, procurando utilizar un lenguaje adaptado a su comprensión, sin olvidar que no está familiarizado con nuestro len­guaje jurídico y que seguramente mediará un intérprete.

El objetivo de estas entrevistas debe ser preparar al solicitante para la entrevista de formalización que realizará ante las autorida­des, asegurándose de que el relato que realice el interesado sea coherente, completo y no contenga contradicciones (ni internas ni con la información del país de origen) y, al mismo tiempo, obtener la información para la defensa del caso y para la preparación de los posibles escritos de alegaciones que complementen la solicitud.

La solicitud se ha de formalizar a través de una entrevista con un funcionario de la policía o de la Oficina de Asilo (OAR), y de la cumplimentación de un formulario por parte del mismo. En esta

entrevista, la labor del abogado no debe ser pa­siva, sino que puede y debe incidir sobre deter­minados puntos, realizar preguntas, completar y aclarar aquellas circunstancias que estime perti­nentes. En este momento, es conveniente que la persona encargada de la asistencia letrada logre dirigir la entrevista hacia aquellos aspectos que haya observado y considerado clave durante la entrevista previa, tal y como señalábamos en el apartado anterior. A estos efectos se reco­mienda tener presente no sólo la legislación de asilo española, sino también las Directivas de procedimientos (32/2013) y de condiciones de acogida (33/2013) cuyo articulado es de aplica­ción directa en España al no estar traspuestas las mismas a nuestro ordenamiento jurídico.

En este punto nos parece muy importante llamar la atención de manera destacada sobre la labor trascendental y la responsabilidad del letrado en la detección de posibles vulnerabili­dades específicas de los solicitantes de asilo, ya que éstas pueden constituir precisamente los elementos clave que les conduzcan o les sepa­ren de su efectiva protección internacional.

Para una mayor profundización en estas cues­tiones y, en general, sobre cuestiones referidas a la asistencia letrada, recomendamos el uso de la Guía de Actuación en la Asistencia Jurídica a so­licitantes de Protección Internacional, elaborada por ACNURy el e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), enlazada aquí en el capítulo 9.

**Procedimientos en frontera y CIE**

El procedimiento de protección internacio­nal en frontera es un procedimiento sumario, por lo que requiere especial dedicación y es- pecialización. Será la admisión a trámite de la solicitud por parte de la administración la que determine el procedimiento aplicable.[[22]](#footnote-23)

La asistencia letrada es preceptiva en el pro­cedimiento en frontera. Debemos recordar que la función del letrado o letrada debe ser acti­va, dirigida al reconocimiento del derecho y no sólo como garante del procedimiento.

Dada la importancia del rol de ACNUR en esta fase del procedimiento se recomienda ponerse en contacto con ACNUR para recabar asesoramiento, dado que a diferencia de lo que ocurre en las solicitudes de territorio, en este caso la OAR debe enviar de forma inmediata el formulario de la solicitud a ACNUR para que se pronuncie.

Como ya hemos manifestado, la solicitud de protección internacional se formaliza con la celebración de una primera entrevista, en presencia de un funcionario o funcionaría de la Oficina de Asilo o de la Comisaría de Policía. El

contenido de la entrevista quedará plasmado en un formulario que será firmado por todas las partes.

En el caso de ser necesario intérprete, éste deberá hablar en un idioma que la persona soli­citante pueda comprender lo que se le transmite yen el que pueda comunicarse correctamente.

Para el caso de una solicitud en un CIE rea­lizada por una persona que esté sujeta a una orden de expulsión y, por tanto, haya permane­cido largo tiempo en España, es de especial re­levancia que quien realice la asistencia letrada explique los motivos por los cuales la protec­ción internacional no había sido solicitada an­teriormente, para que no quepa duda alguna sobre la posible elusión de procedimientos de expulsión o devolución en marcha.

La solicitud de asilo en frontera, podrá ser inadmitida a trámite[[23]](#footnote-24) o denegada[[24]](#footnote-25) mediante resolución motivada en un plazo de 4 días des­de su presentación, según establece el art. 21.2 de la Ley 12/2009. A este respecto es impor­tante tener en cuenta la reciente jurispruden­cia del Tribunal Supremo referente al cómputo de los plazos en frontera, que establece que el mismo se realizará de hora a hora, contadas desde el momento de la finalización de la solici­tud[[25]](#footnote-26). En la práctica, en la mayoría de ocasiones en las que la resolución es desfavorable, ésta es de denegación, no de inadmisión.[[26]](#footnote-27)

En el caso de denegación o inadmisión a trá­mite puede proceder solicitar reexamen de la solicitud en el plazo de dos días hábiles desde su notificación[[27]](#footnote-28). Es importante destacar que a pesar de ser preceptiva la intervención letra­da en este procedimiento, la notificación de la inadmisión o denegación se hace al interesa­do no a su representante. Por ello, la persona encargada de la asistencia letrada deberá estar pendiente de dicha notificación, incluso sería conveniente que tuviera acceso a la misma, sin olvidar que la asistencia jurídica se extiende a la formalización de la solicitud ya toda la trami­tación del procedimiento.

La solicitud de reexamen lleva aparejada la suspensión de los efectos de dicha resolución.[[28]](#footnote-29)

Es importante recordar que el reexamen no es un recurso, sino un trámite procedimental, de tal manera que se pueden incorporar nuevos ar­gumentos, nueva documentación e, incluso, nue­vas alegaciones diferentes de las contenidas en la solicitud; siempre que el cambio y/o la tardía incorporación queden motivados. En todo caso, el escrito de reexamen no puede limitarse a una reiteración de la solicitud inicial, sino que debe detallar y aclarar los aspectos problemáticos de dicha solicitud, ampliar la información facilitada.

Cuando los plazos anteriormente expuestos hayan transcurrido sin que la Administración haya resuelto de forma expresa, la solicitud se admitirá por silencio administrativo (al tener éste carácter positivo en las fases de admisión del procedimiento, tanto en territorio como en frontera) y se tramitará conforme al proce­dimiento ordinario, sin perjuicio de lo que se acuerde en la resolución definitiva.[[29]](#footnote-30)

La resolución dictada tras el reexamen será firme y por tanto, será recurrible en reposición en la vía administrativa y en vía contencioso- administrativo (Art. 29. 1), tal como se indica más adelante, en el apartado c.

**Procedimiento en territorio**

El procedimiento en el territorio[[30]](#footnote-31) puede ser de dos tipos: ordinario o de urgencia, si bien la única diferencia entre ambos es el plazo le­gal para su resolución (tres meses para el de urgencia, seis meses para el ordinario, que, en todo caso, suelen ser sobrepasados).

La formalización de la solicitud se realiza de la misma manera que en frontera, es decir, mediante la entrevista y cumplimentación de un formulario, en presencia de intérprete si fuera preciso. La ventaja en estos casos sue­le ser que la entrevista se hará con cita pre­via y sin las presiones que se generan en una frontera o en un CIE. En este procedimiento aunque no se establece como preceptiva, el solicitante tiene derecho a asistencia letrada en la entrevista.

La detección de solicitantes de protección internacional en el territorio es menos habitual y está a menudo relacionada con potenciales solicitantes en asistencias penales, en asuntos relacionados con explotación sexual o laboral, en violencia de género, o casos de mera irre­gularidad en la que la persona extranjera ma­nifieste la imposibilidad de obtener sus propios documentos del país de origen.

Al igual que expresábamos sobre la entre­vista realizada en el procedimiento en frontera, el abogado o abogada, debe tener una presen­cia activa; en este caso, quien realiza la asis­tencia puede, en algunas ocasiones, conocer previamente a la persona solicitante lo que le permitiría una preparación más completa de la entrevista. Para ello es conveniente celebrar reuniones previas, de modo que la persona interesada adquiera confianza y sea capaz de narrar su historia, incidiendo en los puntos que sean más relevantes de su relato. Por parte del letrado se procederá a la recopilación de infor­mación sobre el país de origen[[31]](#footnote-32).

Se aportará en la entrevista con el funciona­rio correspondiente cualquier informe relativo al estado físico, social o psicológico del solici­tante, emitido por médicos, psicólogas, traba­jadoras sociales, etc.

Así mismo, se podrá presentar mediante un escrito el relato de hechos narrados por la per­sona solicitante. Este escrito, podrá ser aporta­do en el momento de la entrevista o bien, en el plazo de 10 días establecido para aportar docu­mentación.

También durante la entrevista, el letrado o letrada que asista, podrá intervenir en cual­quier momento y realizar preguntas que acla­ren los extremos que considere necesarios. En el caso de considerar necesario hacer constar alguna incidencia, que deba sertenida en cuen­ta a la hora de resolver el expediente, podrá dejar constancia de ésta en la propia entrevista o bien, remitirla mediante escrito directamen­te a la Oficina de Asilo (OAR).

En la actual regulación no existe plazo para solicitar asilo en territorio, a diferencia de la legislación anterior que exigía que la solicitud se presentara en el plazo de un mes, desde la entrada en España; a pesar de ello, si ha trans­currido más de ese plazo, es aconsejable de­jar constancia en la entrevista de los motivos por los que no se realizó antes la solicitud, de modo que quede claro en el procedimiento que la solicitud no tiene como causa evitar la aplicación de la Ley de extranjería y que la di­lación no se ha producido por una ausencia de temor, que podría llevar a una denegación de la solicitud.

La decisión de admisión o no a trámite de la solicitud de asilo deberá ser notificada den­tro del plazo de un mes conforme al Art. 20.2 de la Ley 12/2009. Los supuestos de inadmi­sión son los mismos que en el caso de proce­dimiento en frontera, sin embargo, no son de aplicación en esta fase, los supuestos de de­negación del artículo 21.

Una vez que la solicitud sea admitida a trá­mite, el expediente se podrá tramitar por el procedimiento ordinario o por el procedimien­to de urgencia. Tras esta admisión a trámite, es posible aportar nuevos informes o solicitar nuevas entrevistas con quien instruya el pro­cedimiento. El letrado o letrada podrá solicitar copia de lo actuado a la Oficina de Asilo a efec­tos de completar el expediente en todo aquello que considere necesario.

En el procedimiento ordinario, la resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses a contar desde la solicitud. El silencio tendrá ca­rácter negativo, lo que en la práctica se tradu­ce en que en escasas ocasiones este plazo se cumple.

Para estos casos, en los que los plazos se exceden, el abogado deberá valorar la posibili­dad de acudir a la vía jurisdiccional, recurrien­do ante la Audiencia Nacional contra la *deses­timación presunta* de la solicitud, como está previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con­tencioso-Administrativa. Esta opción puede ser especialmente relevante cuando se trate de su­puestos que, estando suficientemente funda­mentados (documentalmente o apoyados en posiciones de ACNUR p. ej.), no sean resueltos en plazo o en aquellas solicitudes de personas procedentes de países en conflicto, en las que la administración, arguyendo criterios de pru­dencia, opta por no resolver. Esta opción será pertinente también cuando la falta de resolu­ción en plazo pueda afectar a solicitudes de re­agrupación o extensión familiar.

En cambio, los plazos de la tramitación por el procedimiento de urgencia previsto en el Art. 25 de la Ley de Asilo, quedan reducidos a la mitad.

**Recurso contencioso-administrativo. Interposición de demanda y medidas cautelares**

Tanto en el supuesto de inadmisión como en el supuesto de denegación, puede proce­der la interposición de Recurso Contencioso- Administrativo contra dicha resolución; sin embargo el procedimiento y el órgano en­cargado de su conocimiento varían en cada caso.

En el caso de inadmisión, la decisión es re­currible ante el Juzgado Central, que seguirá el procedimiento abreviado del Art. 78 de la Ley 29/98. En el supuesto de que sea confir­mada la resolución recurrida, ésta será recu­rrible ante la Audiencia Nacional siguiendo los cauces del procedimiento ordinario del Art. 81 y ss. de la Ley 29/98, sobre el recurso ordina­rio de apelación.

Por el contrario, cuando la decisión sobre una solicitud de protección internacional es denegada, ésta puede ser recurrida ante la Au-

diencia Nacional, conforme al procedimiento de los Arts. 43 y ss. de la Ley 29/98, del procedi­miento ordinario en primera o única instancia.

En cuanto a la solicitud de medidas caute­lares, en los supuestos de inadmisión, se tra­mitarán ante los Juzgados Centrales de lo Con­tencioso Administrativo. Y, por su parte, en el caso de denegación, las medidas cautelares, se tramitarán ante la Audiencia Nacional siguien­do los cauces del procedimiento ordinario.

Las medidas cautelares por la que se soli­cite la suspensión del acto recurrido, tendrán, en todo caso, la consideración de especial ur­gencia contemplada en el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asi­mismo, se adoptarán "in audita parte", salvo en el supuesto en que se vea afectado un me­nor, en cuyo caso el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado pri­mero de este artículo.

La solicitud de medidas cautelares se efec­tuará, mediante *otrosí,* en el escrito de interpo­sición de recurso o de redacción de la demanda y ante el Juzgado que va a conocer el recurso contencioso.

Es especialmente relevante en este caso in­cidir en los riesgos existentes para el solicitante en caso de retorno (que configurará en estos casos el *periculum in mora),* haciendo referen­cia a información de país de origen y, sobre todo a posibles informes emitidos por ACNUR u otros organismos, informes médicos, etc.

Para casos de especial urgencia en la solici­tud de medidas cautelarísimas y cuando el Juz­gado de lo Contencioso se encuentre cerrado, será de aplicación lo dispuesto en artículo 42.5 del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial, que establece que cuando no sean días hábiles (son inhábiles festivos, sábados y domingos), acudiremos al Juzgado de Instruc­ción en funciones de guardia.

La solicitud de medidas cautelares será re­suelta mediante auto en el plazo de dos días. Dicho auto no será recurrible, y en este se dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que a su derecho corresponda, o bien se convocará a las partes a una comparecencia en el plazo de 3 días. Transcurrido este plazo, ya sea tras la celebración de la comparecencia o la presentación de las alegaciones de la parte contraria, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modifica­ción de la medida adoptada, el cual será recu­rrible ya conforme a las reglas generales.

Por otro lado, en relación con la demanda judicial, es importante que la letrada o el letra­

do conozcan bien el expediente administrativo y que solicite copia del mismo. Especialmente relevantes son las entrevistas y los escritos de alegaciones o informes de apoyo, así como la valoración realizada en el informe de instruc­ción para poder rebatirlo.

Será la persona interesada quien aportará informaciones útiles para la formulación de la demanda a través la realización de una o va­rias entrevistas previas. En este momento, es preciso hacer constar, en su caso, la existencia de defectos formales, la ausencia de comuni­cación a ACNUR o los defectos en relación a la asistencia letrada o al derecho a intérprete. Por último, la demanda será completada con las informaciones actualizadas acerca del país de origen del solicitante de protección inter­nacional.

En cuanto a la prueba, se puede plantear aportando la documentación junto al escrito de la demanda, mediante la solicitud del pleito a prueba por medio de otrosí, o en las alegacio­nes complementarias.

Destaca, entre otros, la prueba de la situa­ción del país de origen de los informes de orga­nismos especializados gubernamentales o no gubernamentales (HRW, Al, Freedom House, US Department, Home Office, etc...) o centros de documentación. Con respecto a ACNUR hay que recordar que el mismo no responde a pe­ticiones de información general sino a peticio­nes de prueba sobre cuestiones doctrinales o aspectos sustantivos de la solicitud. (Ver indi­caciones del Capítulo 3).

En ambos casos, la sentencia definitiva po­drá ser recurrida ante el Tribunal Supremo aunque, sin embargo, solo puede pronunciarse ya en esta fase por errores de legitimidad y no sobre el asunto concreto, y en este sentido no debe evaluar la concesión del derecho a la pro­tección internacional. Por último cabe recordar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitu­cional cuando se den violaciones de derechos fundamentales amparados por la Constitución españolas y las cartas de derechos internacio­nales, tanto como las interpretaciones jurispru­denciales del TEDH y del TJUE.

**Pautas para la utilización de la *Regla 39* ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos**

En el caso de encontrarnos ante una ex­pulsión o devolución inminente de una per­sona extranjera y dándose la circunstancia de que la misma esté en riesgo real de sufrir un grave daño en el país de origen o en el país donde le vayan a expulsar y habiendo agotado todos las vías jurídicas posibles para detenerla, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede impedir que se produzca la expulsión, de forma excepcional, mediante la

"Regla 39", otorgando medidas provisionales que son de cumplimiento obligatorio para el Estado en cuestión.

Debe existir un riesgo inminente de que se produzca la expulsión o devolución, es decir, riesgo de una ejecución inmediata e inexis­tencia de vías legales internas que puedan suspenderla. Si existe a nivel interno todavía la posibilidad de un recurso efectivo, no se considera un "riesgo inminente". Si se alega que un recurso no es efectivo, debe explicarse detalladamente el porqué, por ejemplo un re­curso no es efectivo cuando no tiene un efecto suspensivo.

En todos los casos se debe indicar la hora y fecha prevista de la expulsión o devolución, ya que esto permite al Tribunal decidir sobre el riesgo inminente, en el caso de no poder indi­carlo hay que explicar el motivo.

El procedimiento es escrito, la demanda debe estar motivada y debe exponerse deta-

lladamente los elementos en los que se basa el temor, la naturaleza de los riesgos invoca­dos y las disposiciones del Convenio que se refieran a la violación alegada. Hay que ad­juntar todas las decisiones internas, así como todos los documentos que sirvan de apoyo a la demanda.

La resolución del Tribunal, aunque sea fa­vorable, no estará motivada y el rechazo de aplicación del artículo 39 no es susceptible de recurso.

Se pone a disposición por parte del Tribunal información práctica para la redacción y envío de estas solicitudes: [http://echr.coe.int/Docu- ments/l](http://echr.coe.int/Docu-ments/l) nterim\_Measures\_SPA.pdf

ACNUR también posee una Guía detallada so­bre estas medidas provisionales de la Regla 39, cuyo uso se recomienda: <http://www.acnur.es/> PDF/guia\_regla39\_espanol\_20120720094755. pdf





1. Mantenimiento de la unidad familiar de refugiados: la tramitación de la reagrupación familiar o la extensión de la protección

En aras al mantenimiento o el restablecimiento, en su caso, de la unidad familiar y la vida en familia que impregna el espíritu de la Ley 12/2009, se regulan dos figuras diferenciadas: la extensión de la protección internacional y la reagrupación familiar.

La extensión familiar del derecho de asilo o de la protección subsidiaria[[32]](#footnote-33) [[33]](#footnote-34) es una figura encaminada a restablecer la unidad fa­miliar del refugiado o persona a la que se le concede la protección subsidiaria.

Y la reagrupación familiar[[34]](#footnote-35) se incorpora a nuestro ordenamien­to como consecuencia de la trasposición de la Directiva 2003/86/ CE, del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, y se establece como figura alternativa a los casos en los que los familiares ostenten distinta nacionalidad o para aquellos en los que, sin tener que solicitar la extensión, por no estar necesitados de protección internacional, los familiares quisieran acogerse a los beneficios relativos de la reagrupación familiar en condiciones más favorables.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la extensión familiar?

Descendientes, en primer grado, meno­res de edad

Cónyuge o persona a la que la persona re­fugiada o titular de protección subsidiaria se haya unido por análoga relación, de afectividad y convivencia, excepto en los siguientes casos:

Separación legal, separación de he­cho o divorcio;

Concesión del estatuto de refugiado en razón de género

Cuando el expediente se trámite en virtud de que la persona ha sufrido o tiene fundados temores de sufrir persecución singularizada por vio­lencia de género por parte de su cónyuge o conviviente.

Ascendientes siempre que se acredite la dependencia respecto del beneficiario de la protección.

Descendientes mayores de edad y cua­lesquiera otros familiares siempre que resulte suficientemente acreditada la dependencia respecto de aquellas y ade­más la convivencia previa en el país de origen.

En el caso en que el descendiente haya na­cido en España con posterioridad al reconoci­miento de la protección internacional, los proge­nitores podrán optar entre solicitar la extensión familiar del derecho de protección internacional o la reagrupación en función del interés superior del menor (art.189.2 del RD 557/ 2011).

En cuanto al procedimiento, una vez conce­dido el estatuto de asilo o la protección subsi­diaria, se podrá iniciar el trámite de extensión familiar. Esto se llevará a cabo a través de un doble trámite.

La persona interesada, beneficiaría de pro­tección, hará la solicitud de extensión en la Ofi­cina de Asilo (OAR) o en la comisaría de policía del lugar de residencia y sus familiares presen­tarán su solicitud ante la Oficina Consular o Em­bajada Española del país donde se encuentren.

Al igual que el resto de solicitudes de pro­tección, las solicitudes de extensión familiar se instruyen en la Oficina de Asilo y Refugio, quien eleva propuesta de resolución al Ministro del Interior previo estudio en la Comisión Intermi­nisterial de Asilo y Refugio.

En todo caso, habrá que probar el vínculo del solicitante con el titular del derecho de protec­ción internacional. En los casos de ascendientes y descendientes si no pudiera determinarse sin du­das el parentesco, podrá acudirse a la realización

de las pruebas científicas que fueran necesarias.

Además será determinante en los casos de solicitud de extensión a ascendientes, descen­dientes mayores de edad y otros familiares la acreditación de la dependencia. A la hora de acreditar la dependencia hay que tener en cuenta qué ésta, además de en el sentido eco­nómico, debe entenderse en un sentido am­plio, incluyendo la dependencia por cuestiones médicas, afectivas, o de cualquier otra índole.[[35]](#footnote-36)

Adicionalmente, en los casos de solicitud de extensión a descendientes mayores de edad y de otros familiares, se exige la acreditación de la existencia de convivencia del beneficiario con el familiar previa a la salida del primero del país de origen.

La concesión de la extensión se comunicará a los familiares a través del Consulado o Emba­jada para su traslado a España y les otorgará los mismos derechos de los que goza el titular del derecho de asilo o de protección subsidia­ria. No se reconocerá extensión en el caso de que concurra en el familiar solicitante causa de denegación[[36]](#footnote-37) o de exclusión[[37]](#footnote-38).

En el supuesto de que la causa de denega­ción o exclusión concurra en el solicitante prin­cipal de la protección internacional, los fami­liares presentes en España que estén incluidos en la solicitud por extensión familiar, no tienen necesariamente que verse afectados por dicha denegación o exclusión ya que pueden reunir méritos propios por los que se les deba recono­cer la protección. Existe jurisprudencia relativa a estos supuestos (ver notas al pie 33 y 34).

Decir nuevamente que la denegación es sus­ceptible de recurso potestativo de reposición y recurso contencioso administrativo ante la Au­diencia Nacional.

Un supuesto diferente se da si durante la tramitación de una solicitud de protección in­ternacional, los miembros de la familia de la persona interesada se encontrasen en España y no hubiesen presentado una solicitud inde­pendiente de protección internacional. En ese caso se les autorizará la residencia con carácter provisional, condicionado a la resolución de la

solicitud de protección internacional. Una vez concedida la protección al titular, se solicitará la extensión familiar en la Oficina de Asilo o en la comisaría de policía del lugar donde residan.

**¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la reagrupación familiar?[[38]](#footnote-39)**

Los familiares beneficiarios de este derecho serán los mismos analizados en el supuesto

de extensión familiar (los cuales pueden optar entre una u otra figura) aunque, en todo caso, procederá la solicitud de reagrupación familiar cuando la persona beneficiaria ostente nacio­nalidad distinta a la del titular.

El procedimiento de reagrupación familiar de solicitantes de asilo o protección subsidia­ria, es un procedimiento preferente, pendiente de desarrollo reglamentario, en el que no se exigirán los requisitos establecidos en la Ley de Extranjería para la reagrupación familiar.

En caso de concesión se otorgará una auto­rización de residencia y de trabajo de análoga validez a la de la persona refugiada o beneficia­ria de protección subsidiaria.

La persona reagrupada no podrá ejercer de­recho de reagrupación hacia otros familiares.

1. **Personas en situación de vulnerabilidad, en particular: menores, determinados grupos de mujeres y personas perseguidas por su orientación sexual o identidad de género.**

Por primera vez, la ley reguladora de asilo, atendiendo a lo establecido en la Directiva de Procedimientos 2013/32/UE[[39]](#footnote-40), es­tablece en los Artículos 46 y s.s. un tratamiento diferenciado a los denominados grupos vulnerables. Así el ***Artículo 46*** establece, que: “*En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situa­ción específica de las personas solicitantes o beneficiarias de pro­tección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias mo­noparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológi­ca o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.”[[40]](#footnote-41)*

Por otro lado, se introduce en el Artículo 46.3, la posibilidad de una concesión de Autorización de Residencia por Razones Hu­manitarias, figura que da cabida a nuevos supuestos. A través de ésta, las personas que no reúnen las características para la conce­sión de cualquiera de los dos grandes estatutos pueden obtener

amparo, por lo que el abogado o la abogada debe tenerlo presente.

Pese a que a fecha de publicación de esta guía no existe desarrollo reglamentario y el "tratamiento diferenciado" es un concepto jurídico indeterminado[[41]](#footnote-42), teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa Europea (Direc­tivas 2013/33/UE de Acogida y 2013/32/UE de Procedimientos) es obligación de los Es­tados miembros detectar lo antes posible las necesidades específicas de los colectivos más vulnerables a efectos no solo de su acogida, sino también de las cautelas procedimentales que tal vez requieran para poder presentar su caso adecuadamente. Por ello, es preciso hacer especial referencia a la intervención con las personas que pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad a fin de que desde la abogacía seamos especialmente diligentes y cuidadosos cuando nos corres­ponda su asistencia.

En este sentido, el abogado tiene un papel fundamental en la pronta detección de solici­tantes con necesidades específicas, teniendo presente en su actuación la necesidad de ga­rantizar un enfoque adecuado durante las dis­tintas fases del procedimiento de protección internacional y teniendo en cuenta también otras posibilidades de protección más allá de la protección internacional como, por ejemplo, el sistema específico de protección a víctimas de trata de seres humanos o el sistema de protección a menores.

**¿Pueden los Menores no acompañados solicitar protección internacional? Pautas de actuación.**

Si vemos las estadísticas de solicitudes de protección internacional realizadas por meno­res en España, podemos observar que la ma­yoría de ellas son realizadas por menores que se encuentran en compañía de sus familiares. Tal circunstancia no nos debe hacer olvidar que el menor o la menor tienen sus propios dere­chos e intereses, y que debe primar "el interés superior del menor"[[42]](#footnote-43). Por ello, en estos casos resulta especialmente relevante el tratamiento diferenciado. De lo contrario, tal y como ocu­rre en demasiadas ocasiones, esos derechos se desvanecen en el núcleo familiar.

Por otro lado, y para todos aquellos meno­res solicitantes de protección internacional que hayan sido víctimas de cualquier forma de abu­so, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano o degradante, o que hayan sido vícti­mas de conflictos armados debemos exigir que reciban la asistencia sanitaria y psicológica ade­cuada y la asistencia cualificada que precisen.

Cuando hablamos de menores no acom­pañados, nos referimos a aquellas personas menores de 18 años que están solos, que se encuentran separados de ambos padres, y no están acompañados de ningún adulto que pue­da ocuparse de ellos por Ley o costumbre.

Estos niños o niñas deben ser puestos a dis­posición de las autoridades competentes de protección de menores a la mayor brevedad para que adopten las medidas oportunas, las cuales deben valorar la posibilidad de solicitar protección internacional para el niño o niña aunque éste no lo hubiere demandado.

En los supuestos en los que la minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se pondrá el hecho en conocimiento inmedia­to del Ministerio Fiscal, quien debe disponer lo necesario para la determinación de la edad del menor. Los letrados y letradas deben tener muy en cuenta la importancia de informar al menor de su derecho a negarse a las pruebas médicas de determinación de la edad y las consecuencias que de ello se derivan, así como comunicar al joven en qué consisten esas pruebas, atendien­do particularmente a las cuestiones de género. En este proceso, en caso de realización de las pruebas, colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgen­te, realizarán las pruebas científicas necesarias.

Es importante recordar, tal y como ha hecho el Defensor del Pueblo, que todas las institu­ciones que participan en la realización de estas pruebas coinciden en señalar que no son del todo fiables, por lo que siempre debemos exigir que se aplique el beneficio de la duda a favor del menor; y que, por otro lado, cuando tenga un pasaporte válido no deberían realizarse las pruebas. En este sentido se ha pronunciado la STS de 16 de enero de 2015 (ver recopilación de sentencias en Capítulo 10) que establece que la persona extranjera de cuyo pasaporte o documento de identidad se desprenda su mi­noría de edad no puede ser considerada indo­cumentada ni sometida a pruebas complemen­tarias de determinación de la edad.

Por otro lado, la negativa a someterse a tal reconocimiento médico no impedirá que se dicte resolución sobre la solicitud de protec­ción internacional.

En la asistencia, no se debe olvidar que las y los menores pueden tener serias dificultades para expresarse, especialmente en un primer

momento, debido al miedo, la desconfianza, el desconocimiento del idioma o la madurez. Por ello, se debe tener en consideración el grado de desarrollo del mismo. Y en todo caso se debe perseguir que se les proporcione información adecuada a su edad. Los abogados y abogadas, en este sentido, debe prestar especial atención a que comprenda no sólo sus derechos sino las consecuencias del procedimiento, y velar por­que las personas profesionales, intérpretes o funcionarías que participen en la entrevistas les profesan el trato adecuado. En este senti­do, es necesario conocer y tener en cuenta las garantías recogidas en el Protocolo de Fiscalía sobre menores extranjeros no acompañados.

Durante el tiempo que dediquemos al menor, y pese a que podamos encontrarnos en circuns­tancias adversas (barreras lingüísticas, tiempo de actuación limitado...etc.), se deben adoptar determinadas cautelas[[43]](#footnote-44). Las entrevistas al me­nor deben celebrarse en una atmósfera amiga­ble para el niño, en un tono distendido y em­pleando en todo momento un lenguaje simple y apropiado a la edad. Se debe explicar al menor la función asignada a cada uno de los presentes (entrevistador, intérprete u otro profesional), el objetivo de la entrevista, insistiendo en el carác­ter confidencial de la misma cuyo contenido solo será utilizado para ofrecer al menor la protec­ción y la asistencia que pueda requerir. Es preci­so señalar que los menores pueden no conectar emocionalmente con lo que cuentan del mismo modo que los adultos, detectándose durante el trascurso de la entrevista una falta de reacción emocional ante cuestiones clave sin afectar a la credibilidad del relato.

Debido a su corta edad, la dependencia y relativa inmadurez, los niños deben gozar de garantías procedimentales específicas para ga­rantizar que se adoptan decisiones adecuadas en relación a sus necesidades de protección in­ternacional.

**Grupos vulnerables de mujeres y víctimas de trata**

el ámbito familiar, violencia sexual en el marco de un conflicto, crímenes de honor o relaciona­dos con la dote etc. También pueden ser perse­guidas por negarse a acatar normas, valores o costumbres sociales represivas o pueden sufrir grave discriminación por su condición de mujer.

Estas formas de persecución generan un gran sufrimiento. Por ello en la atención jurídi­ca es importante tener en cuenta las siguientes cautelas[[44]](#footnote-45):

Una adecuada detección para su deri­vación al procedimiento de protección internacional: muchas mujeres y niñas desconocen que su experiencia y las si­tuaciones de persecución vividas en su país de origen podrían ser susceptibles de protección internacional.

La violencia sexual y de género que sufren las mujeres son experiencias traumáticas que no se cuentan con facilidad ya que generan un gran sufrimiento. De hecho, en casos de violencia sexual, muchas mu­jeres lo ocultarán por el estigma que ello supone y por temor a verse rechazadas y marginadas si se enteran en su familia o comunidad.

Además, hay que tener en cuenta factores culturales, religiosos, la edad y el nivel so­cio-educativo que pueden dificultar la asis­tencia jurídica que se debe proporcionar.

Por estas razones es importante promover un ambiente abierto y tranquilizador que pro­mueva la confianza y la confidencialidad, con­diciones que beneficiarán la comunicación de cuestiones sensibles y personales.

Las mujeres deben ser entrevistadas separa­damente de sus familiares o de otras personas que les acompañaran y se les debe dar la opor­tunidad de ser entrevistadas por personas del mismo sexo, incluyendo cuando se requiera de la ayuda de un intérprete

Especial mención merece la trata[[45]](#footnote-46) con fi­nes de explotación sexual, que es una forma de violencia ejercida contra las mujeres que pue­de dar lugar a la protección internacional[[46]](#footnote-47). Es importante tener presente que las víctimas de trata normalmente permanecen en constante amenaza, necesitan poner su vida a salvo y ser protegidas, y para ello es preciso identificarlas

(labor que actualmente corresponde a la poli­cía). Además es necesario garantizar la no de­volución y facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional cuando se detecta, por ejemplo, que existe un riesgo de sufrir per­secución en caso de retorno debido a la falta de protección efectiva por parte de las autorida­des del país de origen.

Sin embargo, actualmente, la trata sigue siendo abordada desde la persecución del delito y no como una violación grave de los derechos humanos de las mujeres, y ello im­plica que muchas víctimas extranjeras que se encuentran en situación irregular quedan sin identificar y que a quienes se identifica se "les proteja" ofertándoles únicamente el mecanis­mo previsto en el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que condiciona la protección de las víctimas a su colaboración con las autori­dades en la desarticulación de las redes que las explotan, o a la valoración de su situación personal. La realidad es que estas mujeres, fuertemente controladas y atemorizadas por las consecuencias que sus acciones puedan tener sobre ellas y sobre sus familias en ori­gen, no ven la denuncia como una salida a su situación y no cuentan con mecanismos reales de protección.

En este sentido es responsabilidad de la abogacía reivindicar la compatibilidad de pro­cedimientos. Por ello es importante tener siempre presente la posibilidad de solicitar la protección y a tal fin conocer bien los indi­cios que nos pueden llevar a la identificación de una posible víctima. Es fundamental hacer las preguntas adecuadas tanto respecto a los motivos de salida del país, como a lo acaecido en el tránsito (viaje realizado, personas que le acompañan), o sobre su situación médica y psicológica, así como su situación familiar ac­tual (incluyendo si están siendo amenazados en el país de origen). Por último es importan­te profundizar sobre los problemas o riesgos que podría enfrentar en caso de retorno o las razones para no querer o no poder retornar al país de origen.

Siempre debemos tener presente que la devolución a su país de origen puede suponer graves riesgos para su vida y su seguridad: re­presalias de la red, que pueden ser también dirigidas contra otros miembros de la familia - principalmente por no haber pagado la 'deuda' contraída o por haber colaborado en procesos penales contra miembros de la red de trata-; probabilidad real de volver a ser objeto de tra­ta; y ostracismo grave, discriminación severa o castigo por parte de la familia o de la comuni­dad local o, en algunos casos, por parte de las propias autoridades, motivado por el ejercicio de la prostitución.

Para la identificación de víctimas de trata en los procedimientos de protección internado-

nal, especialmente los que se activan en fronte­ra, es muy habitual que el ACNUR se pronuncie de manera favorable a la admisión a trámite de la solicitud a fin de analizar el caso en profundi­dad [[47]](#footnote-48). En estos casos es importante contactar con ACNUR y con alguna organización especia­lizada en la asistencia y protección a víctimas de trata que podrán darnos apoyo para realizar un tratamiento adecuado.

**Persecución por orientación sexual (LGTTBI)**

La Ley 12/2009 no menciona expresamente la orientación sexual ni la identidad de género como causas de vulnerabilidad en el artículo 46.1. Sin embargo, el contenido del Art. 46.2 dispone que *"se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus características persona­les, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la pre­sente Ley",* sí sería de aplicación.

En cualquier caso, la Directiva de Procedi­mientos 2013/32/UE, sí alude a los solicitantes LGTBI en su considerando 29 entre aquéllos qué sí pueden requerir garantías procedimen- tales especiales antes de que se adopte la re­solución en primera instancia y en ese sentido, los Estados deberán esforzarse por identificar estos casos para que se les preste el apoyo ade­cuado, incluyendo el tiempo necesario, a fin de crear las condiciones necesarias para que ten­gan efectivamente acceso a los procedimientos y puedan presentar los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional.

En estos casos hay que tener en cuenta el impacto negativo que estas personas pueden llegar a experimentar a la hora de presentar sus solicitudes de protección internacional en un contexto de procedimientos acelerados (frontera y CIE), debido a la discriminación, el odio y la violencia que han podido sufrir o que temen en caso de volver a su país por lo que, en general, no se recomienda su estudio en este tipo de procedimientos. De hecho mu­chos de estos solicitantes pueden encontrarse profundamente afectados por sentimientos de vergüenza, miedo o trauma y su capacidad para presentar su solicitud puede verse por ello disminuida.

También hay que prestar especial atención al tipo de preguntas que se formula a las personas interesadas en el procedimiento ya que hay algu­nas que no pueden hacerse, bien por atentar al derecho a la intimidad o por ser improcedentes. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de

Justicia de la Unión Europea[[48]](#footnote-49) que declaró que las Directivas europeas, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que las solicitudes que se presenten por razón de la orientación se­xual, sean objeto de apreciación por las autorida­des mediante interrogatorios basados únicamen­te en conceptos estereotipados relativos a los homosexuales; a que se lleven a cabo interroga­torios detallados sobre las prácticas sexuales de una persona solicitante de asilo; a que se acepten como pruebas la práctica de actos homosexuales, su sumisión a «exámenes» para demostrar su ho­mosexualidad o la presentación por dicho solici­tante de grabaciones en vídeo de tales actos; y a que las autoridades nacionales competentes con­cluyan que carecen de verosimilitud las declara­ciones del solicitante de asilo por el único motivo de que éste no invocó su orientación sexual en la primera ocasión que se le ofreció de exponer los motivos de persecución.

Algunas pautas que se deben seguir en las en­trevistas a solicitantes LGTBI son las siguientes:

Incluso antes de que las personas LGBTI sean conscientes de su identidad, suelen haberse sentido diferentes en su infancia: se puede preguntar por esta etapa, por este proceso...

Son frecuentes los sentimientos de ver­güenza, tabú, soledad y autoculpa... des­velar este tipo de sentimientos es mues­tra de credibilidad

El proceso de "salir del armario", es do­ble con uno mismo y cono la sociedad. Se pueden hacer preguntas dirigidas a am­bos procesos.

Cuestiones relacionadas con la familia, ta­les como proceso de apertura a la familia o no, y los motivos fundamentales para adoptar una u otra decisión.

Relaciones afectivas que la persona haya podido mantener, sin entrar en ámbito sexual íntimo, teniendo en cuenta que es posible que no haya tenido ninguna rela­ción, incluso que haya contraído matri­monio o que tenga hijos de acuerdo con las costumbres locales.

Cuestiones relacionadas con la percep­ción de sí mismo en relación con su fe religiosa o creencias religiosas si las tu­viere.

Si procediera por el perfil, cuestiones re­lacionadas con la externalización de su orientación en su país de origen y en el país de acogida: lugares, asociaciones, ac­tividades, grupos...

En relación con las personas transgénero, cuestiones relacionadas con su proceso de transición. Pasos, trato recibido por el personal médico, por el entorno más cer­cano. Operaciones físicas, cambio identi­dad legal...

Durante la entrevista es importante, asi­mismo:

Crear una atmósfera adecuada que gene­re confianza.

Tener actitud paciente y comprensiva. Es posible que la persona se encuentre incó­moda, molesta, nerviosa, irritada... debe­mos ser conscientes de nuestra situación de poder y esforzarnos por rebajar estas tensiones.

No prejuzgar.

Dar la opción de elegir genero intérprete y entrevistador.

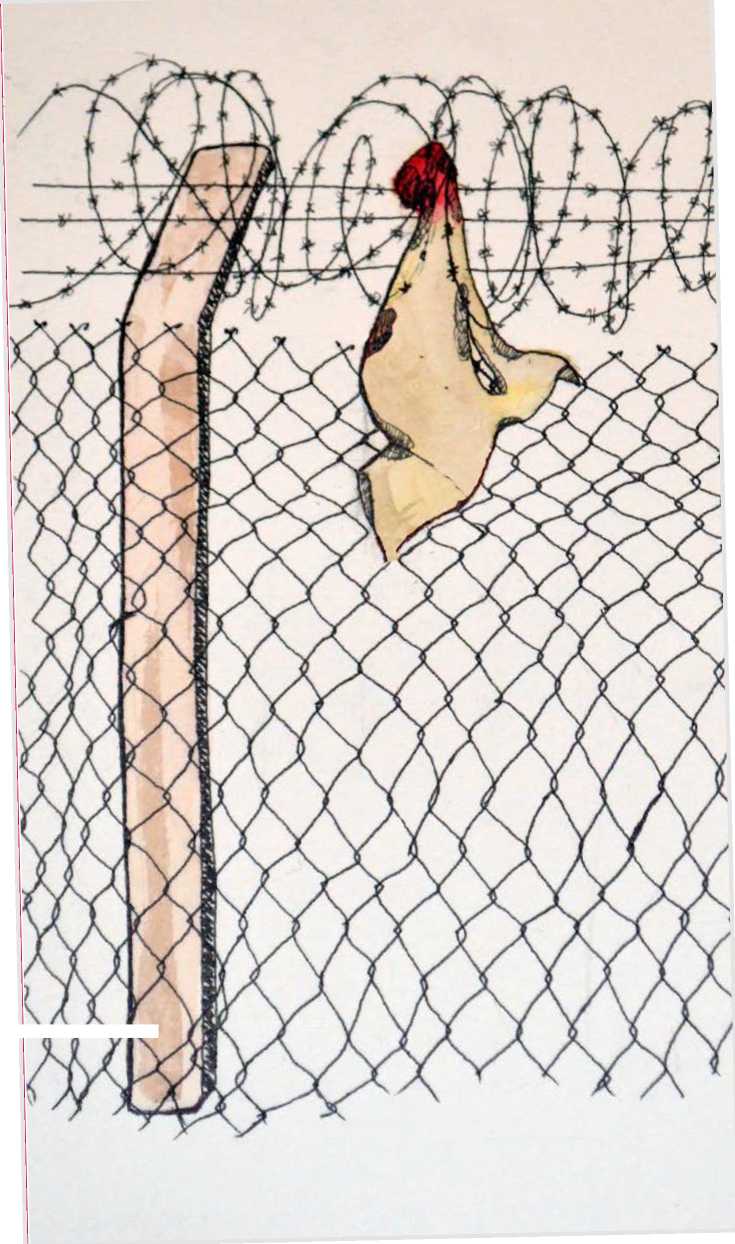
Evitar estereotipos.

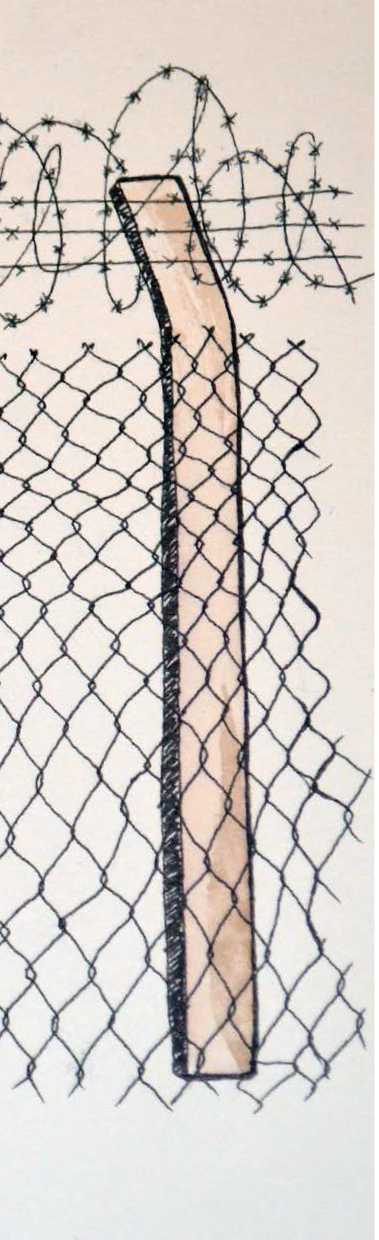
Formular cuestiones abiertas sobre sen­timientos de vergüenza, estigmatización, diferenciación y soledad , salida del arma­rio y relaciones.

No realizar nunca cuestiones intrusivas sobre vida sexual y actividad sexual.

No exigir exámenes médicos (sexólogos, psiquiatras...).

A fin de asistir a las personas solicitantes, apoyarles en su solicitud y velar que se realicen los trámites conforme a las circunstancias de cada persona es recomendable hacer uno de las herramientas y guías que se recomiendan en el Capítulo 9.



Otros mecanismos de protección: reasentamiento y reubicación

Además de las personas que solicitan protección internacio­nal directamente en España, un letrado se puede ver confrontado con dos supuestos que merecen una mención especial. Se trata de las personas que llegan a España a través de programas de reasentamiento y de reubicación.

El reasentamiento de refugiados en un tercer país consiste en el traslado de refugiados de un país de asilo a otro país que ha acordado admitirles y otorgarles residencia permanente. Es una herramienta de protección para personas que hayan sido reco­nocidas como refugiadas en un país en el que no pueden perma­necer por cuestiones legales, médicas o de otra índole y que son identificadas por ACNUR, quien se encarga de identificar también los países que aceptan a estas personas.

En España, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 12/ 2009, se determina una cuota anual por parte Go­bierno, y el programa se desarrolla en colaboración con ACNUR, y, en su caso, con otras Organizaciones Internacionales relevantes. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros del Interior y de Empleo y Seguridad Social, oída la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, acordará anualmente el número de personas que podrán ser objeto de reasentamiento en España en virtud de estos programas.

Las personas refugiadas reasentadas en España tienen el mis­mo estatuto que cualquier otra persona beneficiaria de protec­ción internacional conforme al procedimiento español.

Puesto que las personas reasentadas ya tie­nen reconocida la protección internacional, la intervención letrada en estos casos estará por tanto más dirigida a la información de los de­rechos y obligaciones que le asisten como per­sonas beneficiarías de protección internacional en España y a los procesos de reagrupación o extensión familiar.

La reubicación, por su parte, es una figura que no aparece recogida en la Ley. Se trata de un mecanismo de reparto de responsabilidad acordado en el marco de la Unión Europea, a través del cual se traslada a personas solicitan­tes de protección internacional de un Estado miembro de la UE a otro.

Las personas que han llegado a España en este proceso vienen como solicitantes de pro­tección internacional, por ello la intervención letrada se debe centrar en la formalización y el seguimiento de la solicitud, el apoyo en su caso en la ampliación de prueba, así como en la infor­mación de derechos una vez concedida la pro­tección, que en estos casos puede ser de esta­tuto de refugiado o de protección subsidiaria.[[49]](#footnote-50)

**9 Herramientas de apoyo a las solicitudes de protección (guías, protocolos, direcciones web de organismos internacionales y organizaciones especializadas)**

En apoyo a una solicitud de protección internacional y en caso de tener que realizar los recursos pertinentes ponemos a dispo­sición aquí una serie de herramientas y guías en función de las necesidades de cada caso.

Para obtener información

sobre el país de origen se recomienda el uso

de los siguientes enlaces:

[www.unhcr.org](http://www.unhcr.org) o [www.acnur.org](http://www.acnur.org)

[www.refworld.org](http://www.refworld.org)

[www.ecoi.net](http://www.ecoi.net)

[www.amnesty.org/es/](http://www.amnesty.org/es/)

[www.hrw.org](http://www.hrw.org)

<http://www.asylumlawdatabase.eu>

Informes sobre países concretos editados por EASO (algunos están editados en español): [https://www.easo.europa.eu/informa-](https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports) [tion-analysis/country-origin-information/country-reports](https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports) y [https://](https://coi.easo.europa.eu/) [coi.easo.europa.eu/](https://coi.easo.europa.eu/)

EASO Practical Guide: Researching the situation of lesbian, gay and bisexual persons (LGB) in countries of origin. <https://www>. easo.europa.eu/news-events/easo-practical-guide-researching- situation-lesbian-gay-and-bisexual-persons-lgb

**Guías y manuales**

Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Re­fugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Es­tatuto de los Refugiados: http://www. acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/ BDL/2012/8983.pdf

Interpretación del artículo 1 de la Con­vención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, abril de 2001.Dispo­nible en: <http://www.refworld.org/> cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. pdf?reldoc=y&docid=50a629dc2

Guía Práctica de la EASO, Entrevista per­sonal: <http://www.asylumlawdatabase>. eu/sites/[www.asylumlawdatabase.eu/](http://www.asylumlawdatabase.eu/) files/aldfiles/ES%20-%20EASO-Practical- Guide-Personal-lnterview-ES.pdf

Guía de Actuación en la Asistencia Jurídica a solicitantes de Protección Internacional, ACNUR e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid: <http://www.acnur.es/PDF/acnur_> guia\_abogados2011\_20120216095526. pdf

Sobre análisis de credibilidad: Beyond Proof - Credibility Assessment in EU As- ylum Systems.

Sobre la aplicación de las cláusulas de exclu­sión, según el artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugia­dos: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/> Documentos/BDL/2004/2554.pdf?view=l

**Sobre necesidades especiales se recomiendan las siguientes guías, directrices o protocolos**

**Persecución por motivos de genero y/u orientación sexual**

DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTER­NACIONAL: La persecución por motivos de género en el contexto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967: [http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Docu- mentos/BDL/2002/1753.pdf](http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Docu-mentos/BDL/2002/1753.pdf)

REFUGEE STATUS CLAIMS BASED ON SE­XUAL ORIENTATION AND GENDER IDEN- TITY - A PRACTITIONERS' GUIDE: https:// [www.icj.org/refugee-status-claims-based- on-sexual-orientation-and-gender-identi- ty-icj-practitioners-guide-n-ll-launched/](http://www.icj.org/refugee-status-claims-based-on-sexual-orientation-and-gender-identi-ty-icj-practitioners-guide-n-ll-launched/)

Guía para solicitantes de protección in­ternacional: persecución por motivos de género, CEAR y otros:

<http://bbpp.observatorioviolencia.org/> upload\_images/File/DOC1285603868\_ guia\_asilo\_genero.pdf

Guías sobre las solicitudes de asilo relati­vas a la mutilación genital femenina: [http://www.acnur.es/PDF/solici- tudes\_relativas\_mutilac¡n\_gen¡- tal\_20130218112611.pdf](http://www.acnur.es/PDF/solici-tudes_relativas_mutilac%c2%a1n_gen%c2%a1-tal_20130218112611.pdf)

Solicitudes de la condición de refugiado basadas en un temor de persecución de­bido a la pertenencia a una familia o clan involucrado en crímenes de honor (2006): <http://www.refworld.org/cgi-bin/> texis/vtx/rwmain/opendocpdf. pdf?reldoc=y&docid=487el05b2

DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTER­NACIONAL N.9: Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orienta­ción sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Con­vención sobre el Estatuto de los Refugia­dos de 1951 y/o su Protocolo de 1967: <http://www.refworld.org/cgibin/> texis/vtx/rwmain/opendocpdf. pdf?reldoc=y&docid=518113d54

EASO Investigación de la situación de las personas lesbianas, gays y bisexuales (LGB) en los países de origen: [https://coi.easo.europa.eu/administra- tion/easo/PLib/BZ0215087ESNfinal.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administra-tion/easo/PLib/BZ0215087ESNfinal.pdf)

Guía sobre persecución por motivos de género: Información en país de origen <https://cear-euskadi.Org/guia/f>

**Menores y menores no acompañados**

Directrices de ACNUR para la determinación del interés superior del menor. Mayo 2008: <http://www.refworld.org/docid/4a892dbf2>. html pp. 45-46.

Directrices de Protección Internacional: So­licitudes de asilo de niños bajo los artículos 1(A)2 y 1(F) de la Convención de 1951 y/o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Re­fugiados, 22 Diciembre 2009: [http://www.re- fworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/open- docpdf.pdf?reldoc=y&docid=4be3cd902](http://www.re-fworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/open-docpdf.pdf?reldoc=y&docid=4be3cd902)

Comité de los Derechos del Niño, Observa­ción General n9 6 (2005): *Trato de los me­nores no acompañados y separados de su familia fuera de su pas de origen.* 1 de sep­tiembre 2005: <http://www.refworld.org/> cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. pdf?reldoc=y&docid=4ffd3eb72

Directrices para la determinación del interés superior del niño. ACNUR: [http://www.re- fworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/open- docpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3eb72](http://www.re-fworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/open-docpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ffd3eb72)

¿Menores o Adultos? Procedimientos para la determinación de la edad, Defensor del Pueblo: <https://www.defensordelpueblo>. es/wp-content/uploads/2015/05/2011- 09-Menores-o-Adultos-Procedimientos- pa ra-la-de te rminaci%C3%B3n-d e-la- edadl.pdf

Protocolo Marco sobre determinadas ac­tuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, de 13 de octubre de 2014: <http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/> pdfs/BOE-A-2014-10515.pdf

Circular DGP-CGEF 6/2014. Criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extran­jeros en CIE: [http://www.migrarconderechos.es/legis- lationMastertable/legislac¡on/C¡rcular\_](http://www.migrarconderechos.es/legis-lationMastertable/legislac%c2%a1on/C%c2%a1rcular_) DGP\_CGEF\_06\_2014;jsessionid=86ADF3 79E2FCBC794A6E12CA48F26FCF

**Trata con fines de explotación sexual**

DETECCIÓN Y DEFENSA DE VÍCTIMAS DE TRATA, Guía práctica para la abo­gacía, Fundación Abogacía Española: <http://www.abogacia.es/wp-content/> uploads/2015/12/GUIA-VICTIMA-DE-TRA- TA-VERSION-FINAL.pdf

La aplicación del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o del Protocolo de 1967sobre el Estatuto de los Refugiados en relación con las víctimas de la trata de personas y las personas que están en ries­go de ser víctimas de la trata (2006): <http://www.refworld.org/cgi-bin/> texis/vtx/rwmain/opendocpdf. pdf?reldoc=y&docid=487el05b2

**Persecución por motivos religiosos**

Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 24 de abril de 2004. Disponible en: <http://www.refworld>. org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendo- cpdf.pdf? reldoc=y&docid=487el0e62

**Persecución por pertenencia a un grupo social determinado**

DIRECTRICES SOBRE LA PROTECCIÓN IN­TERNACIONAL POR "Pertenencia a un determinado grupo social" en el contex­to del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/> Documentos/BDL/2002/1754.pdf

Jurisprudencia recomendada

Se recogen a continuación las sentencias más significativas re­agrupadas en tres apartados. En primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), luego la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y finalmente, la jurisprudencia nacional.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

1. Procedimientos

(Sentencias referidas a la derogada Directiva2005/85/CE y al tex­to refundido de la DIRECTIVA 2013/32/UE del Parlamento Europeo ydel Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comu­nes para la concesión o la retirada de la protección internacional)

* *H. I. D. y B. A.,* C-175/11, 31 de enero 2013

[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=838232) [&docid=133247&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=838232) [=&occ=first&part=1&cid=838232](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=838232)

* *N.S. y otros,* asuntos acumulados C411/10 y C493/10, 21 de diciembre de 2011 [http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=331571) [&docid=117187&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=331571) [=&occ=first&part=1&cid=331571](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=331571)
* *Brahim Samba Diouf*,C69/10, 27 de Julio 2011 [http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=381990) [&docid=108325&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=381990) [=&occ=first&part=1&cid=381990](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=381990)

*Qurbani,C481/13,* 17 de julio 2014 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=155104&pag elndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=383904

*Tall,* C239/14, 17 de diciembre 2015 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?docid=173121&mode=req &pagelndex=l&dir=&occ=first&part=l&t ext=&doclang=ES&cid=396997

1. **Condiciones de Acogida**

(Sentencias referidas a la derogada Directiva 2003/9/CE y al texto refundido de la DIRECTI­VA 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por la que se aprueban normas para la acogida de los solici­tantes de protección internacional).

*CIMADE y GlSTl,* C-179/11, 27 de sep­tiembre 2012 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?docid=127563&doclang=ES

*Saciriyotros,* C-79/13,15 de febrero 2013 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=135874&pag elndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=482738

*Abdullahi y Bundesasylamt,* C394/12, 10 de diciembre 2013 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?docid=145404&doclang=ES

*N.S. y otros,* asuntos acumulados C411/10 y C493/10, 21 de diciembre de 2011 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=117187&pag elndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=331571 *J.N.,* C-601/15,15 de febrero de 2016 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?docid=174342&doclang=ES

1. **Reconocimiento estatuto de refugiado**

(Directiva de definiciones o requisitos)

(Sentencias referidas a la derogada Direc­tiva 2004/83/CE y al texto refundido DIRECTI­VA 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de ter­ceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto unifor­me para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida).

*Abdulla y otros,* asuntos acumulados

C175/08, C176/08, C178/08 y C179/08, 2 de marzo 2010

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/>

ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0175 &from=EN

*Bolbol,* C-31/09,17 de junio 2010 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=82833&pagel ndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=&oc c=first&part=l&cid=435526

*B. y D.,* Asuntos acumulados C-57/09 y C-101/09, 9 de noviembre 2010 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/> ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62009CJ0057 &from=EN

*Y y Z,* asuntos acumulados C-71/11 y C-99/11, 5 de septiembre 2012 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?docid=126364&doclang=ES

*M.,* C277/11, 22 de noviembre de 2012 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=%2522Charter%2Bof %2Bfu nda menta l%2Brights%2522&docid =130241&pagelndex=0&doclang=ES&mo de=req&dir=&occ=first&part=l&cid=434 121#ctxl

*ElKott,* C-364/11, 19 de diciembre 2012 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=131971&pag elndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=294576

*A., B. y C.,* asuntos acumulados C-148/13 a C-150/13, 31 de mayo 2013 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?docid=160244&mode=req &pagelndex=l&dir=&occ=first&part=l&t ext=&doclang=ES&cid=412062

*X, Y y Z,* asuntos acumulados C199/12 a C201/12, 7 de noviembre 2013 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?docid=144215&doclang=ES

*Diakite,* C-285/12, 30 de enero de 2014 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=147061&pag elndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=451018

*M'Bodj,* C-542/13, 18 de diciembre de 2014

<http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=160947&pag elndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=449299

*Shepherd,* C472/13,26 de febrero de 2015 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=162544&pag elndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=443646

*H.T.,* C-373/13, 24 de junio 2015 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=165215&pag eindex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=447622

*Alo y Osso,* asuntos acumulados C443/14 y C444/14, 1 de marzo 2016 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=174657&pag eindex=0&doclang=es&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=445503

1. **Sistema Dublín**

*N.S. y otros,* asuntos acumulados C411/10 y C493/10, 21 de diciembre de 2011 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=117187&pag elndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=331571

*K.,C-*245/11, 6 de noviembre de 2012 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=129325&pag elndex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=69265

*Puid,* C4/11, 14 de noviembre de 2013 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=144489&pag eindex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=808462

*Halaf,* C528/11, 30 de mayo 2013 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=137826&pag eindex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=808246

*Abdullahi y Bundesasylamt,* C394/12, 10 de diciembre 2013 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?docid=145404&doclang=ES

*Mirza,* C695/15,17 de marzo 2016 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=175167&pag eindex=0&doclang=es&mode=req&d¡r= &occ=first&part=l&cid=67040

*Karim,* C155/15, 7 de junio 2016 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=179663&pag eindex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=67668

*Ghezelbash,* C-63/15, 7 de junio de 2016 <http://curia.europa.eu/juris/document/> document.jsf?text=&docid=179661&pag eindex=0&doclang=ES&mode=lst&d¡r=& occ=first&part=l&cid=67933

**Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)**

Se recoge la jurisprudencia en función de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La mayoría de las sentencias del TEDH no están traducidas al español. Se añade aquí el enlace a la sentencia en español, en in­glés y francés déla base de datos HUDOC (en función de la disponibilidad de la versión lin­güística).

**Artículo 3: Prohibición de la tortura**

*Vilvarajah y otros c. Reino Unido,* 30 de octubre 1991 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-16480](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-16480)

*Chahal c. Reino Unido,* 15 de noviembre 1996

[http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-164286](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-164286)

*Sufiy Elmic. Reino* L/n/c/o,28de junio 2011 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-105434](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-105434)

*Amuurc. Francia,* 25 de junio de 1996 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-164266](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-164266)

*Salah Sheekh c.Países Bajos,* 11 de enero 2007

[http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-78986](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-78986)

*M.S.S. c. Grecia y Bélgica,* 21 Enero 2011 <http://hudoc.echr.coe>. ¡nt/eng?¡=001-139046

*Hirsi Jamaa y otros c. Italia,* 23 Febrero 2012

<http://hudoc.echr.coe>. ¡nt/eng?¡=001-139041

*R.C. c. Suecia,* 9 de Marzo 2010 <http://hudoc.echr.coe>. ¡nt/eng?¡=001-97625

*M.A. c. Suiza,* 18 de Noviembre 2014 http://hudoc.echr.coe.¡nt/eng?¡=001-148078

*Tarakhel c. Suiza,* 4 de Noviembre 2014

[http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-148070](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-148070)

*A.F.c. Francia,* 15 de enero 2015 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-150294](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-150294)

*Babajanov c. Turquía,* 10 de mayo 2016 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-162761](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-162761)

*F.G. c. Suecia,* 23 Marzo 2016 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-161829](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-161829)

*M.D. y M.A. c. Bélgica,* 19 enero 2016 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-160251](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-160251)

**Artículo 5: Derecho a la libertad**

**y a la seguridad**

*Saadi c. Reino Unido,* 29 de enero 2008 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-84709](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-84709)

*Auadc. Bulgaria,* 11 de octubre 2011 <http://hudoc.echr.coe>. int/eng?i=001-106668

*Louled Massoul c. Malta,* 27 juillet 2010 <http://hudoc.echr.coe>. int/eng?i=001-100143

*S.D. c. Grecia,* 11 junio 2009 http://hudoc.echr.coe.¡nt/eng?¡=001-93034

*Conka c.Bélgica,* 5 de febrero 2002 http://hudoc.echr.coe.¡nt/eng?¡=001-60026

*O.M. c. Hungría,* 5 de julio 2016 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-164466](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-164466)

*Khlaifia y otros c. Italia, 15 de diciembre 2016* [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-170054](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-170054)

**Artículo 8: el derecho a la vida familiar**

*Mubilanzila c. Bélgica,* 12 de octubre 2006 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-77447](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-77447)

*GUI c. Suiza,* 9 de febrero de 1996 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-164255](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-164255)

*Tanda-Muzinga c. Francia,* 10 de julio 2014 <http://hudoc.echr.coe.int/eng7MD01-145358>

*Mugenzi c. Francia,* 10 de julio 2014 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-145356](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-145356)

*B.A.C. c. Grecia,* 13 octobre 2016 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-167805](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-167805)

**Artículo 13: Derecho a un recurso efectivo**

Ver *Hirsi Jamaa y otros c. Italia, M.S.S. c. Bélgica y Grecia, Conka c. Bélgica Gebremedhin c. Francia,* 26 de abril 2007 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-139384](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-139384)

*I.M. c. Francia,* 2 de febrero 2012 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-108934](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-108934)

*De Souza Ribeira c. Francia,* 13 diciembre 2012

[http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-139031](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-139031)

*A.C. y otros c. España, 22* de abril de 2014 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-148248](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-148248)

**Artículo 14 Protocolo 4: Expulsiones colectivas**

*Ver Hirsi Jamaa y otros c. Italia y Conka c. Bélgica*

*Decisión N.D. y N.T. c. España,* 7 de julio 2015 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?¡=001-158327](http://hudoc.echr.coe.int/eng?%c2%a1=001-158327)

**Jurisprudencia nacional**

<http://www.poderjudicial.es/search/> contenidos.action?action=contentpdf& databasematch=AN&reference=292268 7&links=asilo%20Y%20cuba%20Y%20in dic¡ar¡o&opt¡m¡ze=20031212&publ¡cint erface=true

1. **Combinación de dos motivos de persecución**

STS 7035/1997, de 16 de Enero de 2002, Sala de lo Contencioso, Sección 7a, Recur­so n2: 928/1995 [http://www.poderjudicial.es/search/con- tenidos.action?action=contentpdf&datab](http://www.poderjudicial.es/search/con-tenidos.action?action=contentpdf&datab) asematch=TS&reference=3156167&links =asilo%20Y%20bosn¡a&optim¡ze=200309 12&publicinterface=true

1. **Peligro para la Seguridad nacional**

STS 583/2008, 27 de Marzo de 2008. Sala de lo Contencioso, Sección 5a, Recurso n2: 192/2006 [http://www.poderjudicial.es/search/con- tenidos.action?action=contentpdf&datab](http://www.poderjudicial.es/search/con-tenidos.action?action=contentpdf&datab) asematch=TS&reference=176768&links= asilo%20%22192%2F2006%22&optimize =20080410&publicinterface=true

STS 523/2015,23 de febrero de 2015. Sala de lo Contencioso, Sección 32, Recurso n°:2944/2014

<http://www.poderjudicial.es/search/doA> ction?action=contentpdf&data base mate h=TS&reference=7309334&links=%2229 44%2F2014%22&optimize=20150302&p ublicinterface=true

1. **Dublín, responsabilidad del Estado para examinar solicitud**

SAN 2415/2010, 19 de mayo de 2010, Sala de lo Contencioso, Sección 8a, Recur­so n2 632/2009 <http://www.poderjudicial.es/search/doA> ction?action=contentpdf&data base mate h=AN&reference=5624751&links=%2263 2%2F2009%22&optimize=20100617&pu blicinterface=true

SAN 1935/2013, 9 de mayo de 2013, Sala de lo Contencioso, Sección 2a, Recurso n2: 424/2012 <http://www.poderjudicial.es/search/doA> ction?action=contentpdf&data base mate h=AN&reference=6719432&links=%2242 4%2F2012%22&optimize=20130528&pu blicinterface=true

1. **Estatuto de refugiado frente a la protección subsidiaria**

STS 5211/2015,10 de diciembre de 2015.

Sala de lo Contencioso, Sección 3a, Recur­so n2:1699/2015

[http://www.poderjudicial.es/search/doA](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7560748&links=%22%3A%201699%2F2015%22&optimize=20151222&publicinterface=true) [ction?action=contentpdf&databasematc](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7560748&links=%22%3A%201699%2F2015%22&optimize=20151222&publicinterface=true) [h=TS&reference=7560748&links=%22%](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7560748&links=%22%3A%201699%2F2015%22&optimize=20151222&publicinterface=true) [3A%201699%2F2015%22&optimize=201](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7560748&links=%22%3A%201699%2F2015%22&optimize=20151222&publicinterface=true) [51222&publicinterface=true](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7560748&links=%22%3A%201699%2F2015%22&optimize=20151222&publicinterface=true)

1. Extensión familiar y reagrupación familiar

* SAN 4977/2014, 22 de diciembre de 2014, Sala de lo Contencioso, Sección 8a, Recurso n°: 209/2013 [http://www.poderjudicial.es/search/con-](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7250993&links=extensi%C3%B3n&optimize=20150115&publicinterface=true) [tenidos.action?action=contentpdf&datab](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7250993&links=extensi%C3%B3n&optimize=20150115&publicinterface=true) [asematch=AN&reference=7250993&link](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7250993&links=extensi%C3%B3n&optimize=20150115&publicinterface=true) [s=extensi%C3%B3n&optimize=20150115](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7250993&links=extensi%C3%B3n&optimize=20150115&publicinterface=true) [&publicinterface=true](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7250993&links=extensi%C3%B3n&optimize=20150115&publicinterface=true)
* SAN 1238/2015, 16 abril de 2015, Sala de lo Contencioso, Sección 2a,

Recurso n°: 395/2014 [http://www.poderjudicial.es/search/con-](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7366568&links=proteccion%20internacional%20Y%20Georgia&optimize=20150505&publicinterface=true) [tenidos.action?action=contentpdf&data](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7366568&links=proteccion%20internacional%20Y%20Georgia&optimize=20150505&publicinterface=true) [basematch=AN&reference=7366568&lin](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7366568&links=proteccion%20internacional%20Y%20Georgia&optimize=20150505&publicinterface=true) [ks=proteccion%20internacional%20Y%20](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7366568&links=proteccion%20internacional%20Y%20Georgia&optimize=20150505&publicinterface=true) [Georgia&optimize=20150505&publicinte](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7366568&links=proteccion%20internacional%20Y%20Georgia&optimize=20150505&publicinterface=true) [rface=true](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7366568&links=proteccion%20internacional%20Y%20Georgia&optimize=20150505&publicinterface=true)

* SAN 4522/2016, 30 de noviembre de 2016, Sala de lo Contencioso, Sección 8a, Recurso n°: 265/2015 [http://www.poderjudicial.es/search/con-](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7904702&links=asilo%20Y%20extensi%C3%B3n%20familiar%20asilo&optimize=20170110&publicinterface=true) [tenidos.action?action=contentpdf&datab](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7904702&links=asilo%20Y%20extensi%C3%B3n%20familiar%20asilo&optimize=20170110&publicinterface=true) [asematch=AN&reference=7904702&links](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7904702&links=asilo%20Y%20extensi%C3%B3n%20familiar%20asilo&optimize=20170110&publicinterface=true) [=asilo%20Y%20extensi%C3%B3n%20fami-](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7904702&links=asilo%20Y%20extensi%C3%B3n%20familiar%20asilo&optimize=20170110&publicinterface=true) [liar%20asilo&optimize=20170110&publici](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7904702&links=asilo%20Y%20extensi%C3%B3n%20familiar%20asilo&optimize=20170110&publicinterface=true) [nterface=true](http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7904702&links=asilo%20Y%20extensi%C3%B3n%20familiar%20asilo&optimize=20170110&publicinterface=true)

1. Estatuto de refugiado, valoración de la prueba, orientación sexual, recurso efectivo

* STS, Sala de lo Contencioso. Sección 3a, de 25 de enero de 2016. Estimación par­cial del recurso de casación - Persecución por orientación sexual - Razones humani­tarias STS 124/2016

[http://www.poderjudicial.es/search/doActio](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7593473&links=%222133%2F2015%22&optimize=20160205&publicinterface=true) [n?action=contentpdf&databasematch=TS&r](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7593473&links=%222133%2F2015%22&optimize=20160205&publicinterface=true) [eference=7593473&links=%222133%2F201](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7593473&links=%222133%2F2015%22&optimize=20160205&publicinterface=true) [5%22&optimize=20160205&publicinterface](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7593473&links=%222133%2F2015%22&optimize=20160205&publicinterface=true) [=true](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7593473&links=%222133%2F2015%22&optimize=20160205&publicinterface=true)

* STS, Sala de lo Contencioso. Sección 2a, de 16 de marzo de 2016 - Estimación del recurso - protección internacional para nacionales sirios STS /2016 [http://www.poderjudicial.es/search/doAc](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7628807&links=asilo%20Sirios&optimize=20160329&publicinterface=true) [tion?action=contentpdf&databasematch=](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7628807&links=asilo%20Sirios&optimize=20160329&publicinterface=true) [TS&reference=7628807&links=asilo%20Si](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7628807&links=asilo%20Sirios&optimize=20160329&publicinterface=true) [rios&optimize=20160329&publicinterface](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7628807&links=asilo%20Sirios&optimize=20160329&publicinterface=true) [=true](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7628807&links=asilo%20Sirios&optimize=20160329&publicinterface=true)
* STS,Sala de lo Contencioso. Sección 3a, de 23 de febrero de 2015. Estimación del re­curso de casación.STS 523/2015 [http://www.poderjudicial.es/search/doA](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7309334&links=asilo&optimize=20150302&publicinterface=true) [ction?action=contentpdf&databasematc](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7309334&links=asilo&optimize=20150302&publicinterface=true) [h=TS&reference=7309334&links=asilo&o](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7309334&links=asilo&optimize=20150302&publicinterface=true) [ptimize=20150302&publicinterface=true](http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7309334&links=asilo&optimize=20150302&publicinterface=true)

SAN, Sala de lo Contencioso. Sección 2a, de 5 de febrero de 2015 - Estimación del recurso contencioso administrativo - ar­chivo del expediente de asilo improce­dente. SAN 142/2015 <http://www.poderjudicial.es/search/doA> ction?action=contentpdf&data base mate h=AN&reference=7288402&links=&opt¡ mize=20150213&publ¡cinterface=true

SAN, Sala de lo Contencioso. Sección 4a, de 4 de marzo de 2015 - Estimación del recurso contencioso administrativo - SAN 1075/2015 <http://www.poderjudicial.es/search/doA> ction?action=contentpdf&data base mate h=AN&reference=7349847&links=&opt¡ mize=20150416&publ¡cinterface=true

SAN, Sala de lo Contencioso-Administra­tivo. Sección 2a de 14 de noviembre de 2013. SAN n2 5435/2013. Denegación de asilo <http://www.poderjudicial.es/search/doActio> n?action=contentpdf&databasematch=AN& reference=6888609&links=%22455/2012%2 2&optimize=20131125&public¡nterface=true

SAN 5349/2012, 27 de diciembre de 2012, Sala de lo Contencioso, Sección 2a, Recurso n2 546/2011 <http://www.poderjudicial.es/search/doA> ction?action=contentpdf&data base mate h=AN&reference=6608201&links=%2254 6%2F2011%22&optimize=20130122&pu blicinterface=true

1. **Menor de edad, orientación sexual, asistencia letrada**

STS 3186/2013, 17 de Junio de 2013, Sala de lo Contencioso, Sección 3a, Recurso n2 4353/2012 <http://www.poderjudicial.es/search/doA> ction?action=contentpdf&data base mate h=TS&reference=6770563&links=%22% 3A%204353%2F2012%22&optimize=201 30628&publicinterface=true

1. **Menor de edad no acompañado, determinación de la edad**

STS 27/2015, de 16 de enero de 2015, Sala de lo Contencioso, Sección Ia, Recur­so n2 214/2014 <http://www.poderjudicial.es/search/doA> ction?action=contentpdf&databasematch =TS&reference=7267232&links=nacional¡ dad&optimize=20150130&public¡nterface

1. **Procedimiento urgente, inadmisión a trámite contra Denegación, Sahara occidental, papel de ACNUR**

STS 1971/2013, 27 de Marzo de 2013, Sala de lo Contencioso, Sección 32, Recur­so n2 2529/2012 <http://www.poderjudicial.es/search/doA> ction?action=contentpdf&data base mate h=TS&reference=6710796&links=%2225 29%2F2012%22&optimize=20130517&p ublicinterface=true

70 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS SOL

STS 1957/2013,27 de Marzo de 2013, Sala de lo Contencioso, Sección 3a, Recurso n9 2429/2012 <http://www.poderjudicial.es/search/do> Action?action=contentpdf&databasem atch=TS&reference=6710793&links=as¡ lo%200%20refugio&optimize=20130517 &publicinterface=true

.ICITANTES DE ASILO. GUlA PRÁCTICA PARA LAABOGACÍA

STS8944/2012, 19 diciembre 2012, Sala de lo Contencioso, Sección 3a, Recurso n21711/2012 <http://www.poderjudicial.es/search/do> Action?action=contentpdf&databasema tch=TS&reference=6613353&links=%22 1711%2F2012%22&optimize=20130129 &publicinte rface=true

Fundación

ABOGACÍA ESPAÑOLA

Paseo de Recoletos, 13 ■ 28004 Madrid © +34 91 523 25 93 (fe) @abogaciayddhh (§) fundacion.abogacia.es

**1) Determinación deforma individual y personalizada**

SAN 157/2002, de 16 de Enero de 2002,

Sala de lo Contencioso, Sección 8a, Recur­so n1 2: 795/2001

1. Artículo 4 de la Ley 12/2009 [↑](#footnote-ref-2)
2. El Principio de no devolución o de *non-refoulement,* es un principio erga omnes, reconocido en el Artículo 33 de la Convención de Ginebra. [↑](#footnote-ref-3)
3. El 21 de julio de 2015 el Tribunal Supremo dictó una desafortunada sentencia (STS 3651/2015) en la que, entre otras cosas, equipara ambas figuras erróneamente. Sobre la protección a otorgar a las personas sirias ver: STS de 10 de diciembre de 2O15.Rc5211/2O15 y STS 19 de febrero de 2016.Rc.569/2016. [↑](#footnote-ref-4)
4. 1. Ver en capítulo 9.2) Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los refugiados, Ginebra, diciembre de 2011; y el documento de ACNUR Interpretación del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, abril de 2001.

   [↑](#footnote-ref-5)
5. El Protocolo de Estambul es un manual avalado por la ONU que contiene las líneas básicas para la investigación y documentación pericial de torturas o castigos o tratos crueles, inhumanos y degradantes: <http://codigodh>. org/2014/10/20/que-es-el-protocolo-de-estambul/ [↑](#footnote-ref-6)
6. La definición de refugiado del art. 1 A de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados habla de “temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas..." [↑](#footnote-ref-7)
7. En casos de persecución relacionada con motivos de género, la relevancia de las guías por países es aún mayor, ya que la legislación remite a su concurrencia con *“las circunstancias imperantes en el país de origen."*A fin de facilitar su conocimiento a la abogacía y a agentes de defensa y protección de derechos humanos, en el CEAR-Euskadi con el apoyo de la Abogacía Española, se desarrolló la Guía sobre persecución por motivos de género: Información en país de origen <https://cear-euskadi.org/guia/> [↑](#footnote-ref-8)
8. Ver en capítulo 10 sentencia caso Salah Sheekh sobre la necesidad dee que la evaluación realizada por las autoridades del Estado Contratante sea adecuada y esté suficientemente sustentada (...) [↑](#footnote-ref-9)
9. Ver en capítulo 10 sentencia caso Gaforov (2010) sobre la información relevante aportada por las ONG independientes, invocada por el solicitante y adjuntada. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ver en capítulo 10 sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el asunto INS (Inmigration and Naturalization Service) v. Cardoza -Fonseca (1987) sobre la interpretación del concepto "temor fundado". [↑](#footnote-ref-11)
11. Ver en Capítulo 10 Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de Enero de 2002, sobre lo que se debe entender por persecución individualizada en función de las circunstancias socio-políticas existentes en el país de origen. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ver en Capítulo 10 Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 24 de noviembre de 1997, sobre la persecución en situación del conflicto armado en Bosnia y Herzegovina. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ver en Capítulo 9.2) documento: Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, 24 de abril de 2004. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ver en Capítulo 9.3 el documento del ACNUR "Pertenencia a un determinado grupo social" en el contexto del Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967, de 7 de mayo de 2002. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ver en Capítulo 9.2: guías relativas a Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género; guías sobre las solicitudes de asilo relativas a la mutilación genital femenina; guías sobre la condición de rrefugiados en relación con las víctimas de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de trata; solicitudes de la condición de refugiado basadas en un temor de persecución debido a la pertenencia a una familia o clan involucrado en crímenes de honor. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ver en Capítulo 9.2 sobre el análisis de credibilidad [↑](#footnote-ref-17)
17. Ver Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado, P. 206 y ss. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ver en Capítulo 9.2 documento de ACNUR: Directrices sobre Protección Internacional. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ver en Capítulo 10 STS de 15 de febrero de 2016., Recurso n® 2821/2015; STS de 27 de noviembre de 2014, recurso n° 814/2014. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ver en Capítulo 9 Directrices sobre Protección Internacio­nal. La aplicación de las cláusulas de exclusión: El artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Re­fugiados, 2003. [↑](#footnote-ref-21)
21. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) (aplicable desde el 21 de julio de 2015). [↑](#footnote-ref-22)
22. Ver Art. 19. 6 «6. La resolución que admita a trámite una solicitud de asilo determinará el procedimiento correspondiente.» [↑](#footnote-ref-23)
23. Ver art.21 de la Ley 12/2009. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ver art. 21.2 de la Ley 12/2009. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ver en Capítulo 10, entre otras sentencias: RC 1656/2016, de 7 noviembre de 2016, RC 1666/2016, de 3 de octubre de 2016: = STS 4756/2016, de 7 noviembre de 2016 , RC 1661/2016, de 19 de septiembre de 2016, RC 1304/2016, de 28 de septiembre de 2016. [↑](#footnote-ref-26)
26. En una ocasión, en 2010, el plazo pudo ser ampliado hasta un máximo de diez días por resolución del Ministro del Interior cuando ACNUR lo propuso frente a un supuesto de exclusión o denegación de protección internacional previstos en los artículos 8, 9,11 y 12. [↑](#footnote-ref-27)
27. *TI* En este punto es importante tener en cuenta la interpretación de la jurisprudencia referida con relación al cómputo de los plazos, que, en estos momentos no es pacífica: en un principio parecería afectar únicamente a los plazos de resolución, pero no a los demás trámites, en especial, el trámite de reexamen, sin embargo la Oficina de Asilo ha pasado a considerar el plazo para la petición de reexamen en solicitudes en frontera (aeropuertos y puertos) limitado a dos días naturales. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ver Art. 21.4 de la Ley 12/2009. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ver Art. 21.5. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ver Art. 17 de la Ley. [↑](#footnote-ref-31)
31. Esta información se puede obtener en los enlaces que se encuentran recopilados en el Capítulo 9 de esta guía. [↑](#footnote-ref-32)
32. Se podrá solicitar la extensión de la protección a favor de los siguientes familiares: [↑](#footnote-ref-33)
33. Ver Art 40 L.12/2009 “Extensión familiar del derecho de asilo o de la protección subsidiaria”. [↑](#footnote-ref-34)
34. Ver Art 41 L.12/2009 “Reagrupación familiar”. [↑](#footnote-ref-35)
35. Nota del Comité Ejecutivo de ACNUR sobre Reagrupaciôn Familiar, de 13 de agosto de 1987 http://www. refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. pdf?reldoc=y&docid=50acc6962;

    Background Note (...): Family Reunification in the context of Resettlement and Integration. Protecting the Family: Challenges in Implementing Policy in the Resettlement Context, de junio de 2001 <http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf>;

    Executive Committee—50th Session No. 88 (L) - Conclusion on the protection of the refugee's family <http://www.unhcr.org/publications/legal/41b041534/> compilation-conclusions-adopted-executive-committee- international-protection.html [↑](#footnote-ref-36)
36. Ver Arts. 9 y 12 de la Ley 12/2009. [↑](#footnote-ref-37)
37. Ver Arts. 8.2, Art. 8.3, y 11 de la Ley 12/2009. [↑](#footnote-ref-38)
38. Es importante señalar que la reagrupación familiar, recogida en el artículo 41 de la Ley, no se ha aplicado desde su aprobación, privando de su derecho a refugiados con familiares de distinta nacionalidad y, normalmente, dejando dichas solicitudes sin resolver. Dicha no aplicación se justificaba en un primer momento en la falta de desarrollo reglamentario, argumento rechazable cuando el mismo debió aprobarse ya en 2010, y cuando el articulado de la ley, es suficientemente detallado para su aplicación, siendo casi idéntico al art. 40, que recoge la extensión familiar.

    Asimismo, se alude a que la reagrupación familiar del art. 41, no es competencia de las autoridades de asilo sino de las de extranjería, lo que contradiría la propia regulación de la extranjería, que en ningún momento hace referencia a dicha posibilidad, ni en la Ley 4/2000, modificada en profundidad en paralelo a la elaboración de la Ley de Asilo en 2009, y nuevamente y 2013, ni en su reglamento, aprobado en 2011, normas que el legislador, de haber sido esa su intención podría haber utilizado para regularlo.

    Hay que recordar que la propia Exposición de Motivos de la Ley 12/2009, afirmaba incorporar "un procedimiento especial y preferente de reagrupación familiar que garantiza el derecho a la vida en familia de las personas refugiadas o beneficiarías de protección subsidiaria", que pretendía "dar una respuesta más eficaz a los casos en que las personas integrantes de la unidad familiar de la persona protegida no requieren ellas mismas de protección, pero sí de un régimen de residencia y prestaciones que permitan el mantenimiento de la unidad familiar en condiciones óptimas". [↑](#footnote-ref-39)
39. Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición). [↑](#footnote-ref-40)
40. Este pronunciamiento legislativo está en sintonía con la previsión también recogida en el Artículo 31.bis de la actual Ley de Extranjería que parece proclamar una protección específica especialmente a las víctimas de violencia de género (Artículo 31.bis) o a las víctimas de trata de seres humanos (Artículo 59bis) o menores no acompañados (Artículo 35). [↑](#footnote-ref-41)
41. No obstante es necesario ver las obligaciones que en este sentido establece la Directiva de Procedimientos, que hace mención a que algunos solicitantes pueden requerir garantías procedimentales especiales por razón entre otros de su edad, su género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, enfermedad grave, enfermedad mental o consecuencias de torturas, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual. Ver en este sentido, entre otros, los Considerandos n® 29 a 32 del Preámbulo, el artículo 15.3 sobre requisitos de la entrevista personal y artículo 24 sobre solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales. [↑](#footnote-ref-42)
42. Ver en Capítulo 9, Directrices de ACNUR para la determinación del interés superior del niño. [↑](#footnote-ref-43)
43. Véase en el capítulo 9.3) diversos materiales, guías y directrices sobre la protección adecuada de los menores y de los menores no acompañados; y Arts. 23 y 24 de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/> TXT/?uri=CELEX%3A32013L0033

    Como mencionábamos en el Capítulo 3, la persecución por motivos de género se da cuando las violaciones de los derechos de una persona tienen relación con el papel que se le asigna debido a su género, identidad de géne­ro o a sus preferencias afectivo-sexuales.

    Las mujeres y las niñas sufren formas de persecución específicas como, por ejemplo, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos y/o precoces, violencia de género en [↑](#footnote-ref-44)
44. Ver en Capítulo 9 más información en el Folleto de ACNUR sobre "La Persecución por Motivos de Género y el Asilo", y las Guías de ACNUR sobre Persecución por motivos de género de 2002. [↑](#footnote-ref-45)
45. Ver en Capítulo 9, Guía práctica para la abogacía, Fundación Abogacía Española. Detección y defensa de víctimas de trata. [↑](#footnote-ref-46)
46. Ver en este sentido, las Directrices de ACNUR sobre las solicitudes presentadas por víctimas de trata o en riesgo de 2006, disponibles en: http://www. refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. pdf?reldoc=y&docid=487e!05b2. [↑](#footnote-ref-47)
47. Por otro lado, hay que tener especial cuidado con determinados perfiles de mujeres que solicitan protección internacional en un aeropuerto o en un CIE pues algunas de ellas por su perfil, el trayecto que realizan hasta llegar a Europa y sus alegaciones sobre cómo y quién les ayuda a realizar dicho viaje, o sobre posibles abusos sufridos, podrían estar en una situación de trata o en riesgo de serlo. [↑](#footnote-ref-48)
48. Ver Jurisprudencia en Capítulo 10. Asuntos acumulados: X, V y Z, C-199/12 a C-201/12, y Asuntos acumulados: *A, B,* y C, C-148/13 a C150/13. [↑](#footnote-ref-49)
49. En el marco de la Agenda Europea para la Migración, 22 estados europeosse han comprometido a reasentar a 22.504 personas en dos años. En el caso de España, únicamente se comprometió a reasentar a 1.449 personas. Igualmente, la Unión Europea acordó reubicar a 160.000 personas desde Estados miembros sometidos a mayor presión migratoria (Italia, Grecia, Hungría) a otros Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, Hungría rechazó el esquema final adoptado por el Consejo, por este motivo, 54.000 personas quedaron pendientes de reasignación. España se comprometió a reubicar a 15.888 personas en dos años; 9.323 desde Grecia e Italia, a la espera de determinar la procedencia de los cerca de 6.565 refugiados restantes (pendientes tras la negativa de Hungría). [↑](#footnote-ref-50)